

The background of the entire page is a light gray topographic map with white contour lines. The map features various geographical shapes, including what appears to be the outline of South America in the upper right quadrant.

ALerta DEMOCRÁTICA

Escenarios para el futuro de la
democracia en América Latina
2015—2030

Alerta DEMOCRÁTICA

Escenarios para el futuro de la
democracia en América Latina
2015—2030

Realización



Apoyado por



Creative Commons – Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

El presente documento cuenta con licencia de Reos Partners Inc. bajo los términos expresados en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Esto significa que los usuarios pueden compartir y mezclar nuestro material siempre y cuando otorguen a Reos Partners Inc. el crédito debido. El presente documento no puede ser utilizado con fines comerciales. Véase <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

ESCENARIOS PARA el... FUTURO DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA 2015 2030

ÍNDICE

Objetivos.....	4
Introducción a los Escenarios.....	5
Características de los Escenarios.....	7
Presentación de la metodología.....	8
¿Cómo se construyeron los Escenarios para el Futuro de la Democracia en América Latina y qué viene después?	9
Escenarios para el Futuro de la Democracia en América Latina (2015 – 2030)	10
DEMOCRACIA EN TRANSFORMACIÓN.....	14
DEMOCRACIA EN Tensión.....	22
DEMOCRACIA EN MOVILIZACIÓN.....	28
DEMOCRACIA EN AGONÍA.....	34
Colaboradores	39



OBJETIVOS

Los escenarios descritos en las siguientes páginas son un marco conceptual idóneo para desarrollar un lenguaje común que permita un mejor entendimiento de las fuerzas que determinan y moldean el futuro de las democracias en América Latina. Además, son una valiosa referencia sobre las distintas estrategias que podríamos concebir e implementar en forma individual y colectiva ante los desafíos del presente. En suma, son los posibles resultados que podremos esperar en 2030 a partir de nuestras acciones u omisiones y su objetivo es ofrecer una plataforma para el diálogo y la acción.



INTRODUCCIÓN A LOS ESCENARIOS

América Latina se enorgullece en junio de 2015 del abrumador predominio de la democracia como forma de gobierno.

En un pasado muy reciente, su realidad cotidiana era absolutamente distinta. Hoy, la mayoría de sus países cuenta con democracias jóvenes que tratan de afianzar sus raíces sobre un suelo erosionado hace apenas pocas décadas por las dictaduras militares y los autoritarismos. No obstante, una certeza pervive a lo largo del territorio que hermana a los países al sur del Río Bravo: la consolidación de la democracia es un auspicioso proceso que, sin embargo, está aún muy lejos de ser irreversible. En esa medida, llegamos actualmente a un punto de bifurcación del que emergen múltiples caminos que la región podría recorrer a corto, mediano y largo plazo.

En eso se basa el presente ejercicio: en ser un recorrido de posibilidades futuras, un camino para los próximos tres lustros que tiene como estación de llegada la América Latina de 2030.

En este ejercicio de planificación transformadora por escenarios, el Equipo de Escenarios (EE), un heterogéneo grupo de lideresas y líderes latinoamericanos unido ante todo por su profunda convicción democrática, seleccionó de manera conjunta entre las opciones discernibles, las principales características presentes en la actualidad que trazan hacia adelante cuatro caminos relevantes, desafiantes, factibles y claros por los que podrían transitar las democracias en América Latina durante los próximos 15 años.

El resultado de un trabajo intenso de seis meses se presenta en las siguientes páginas. No son pronósticos ni predicciones sobre lo que va a ocurrir ni son recomendaciones o planes sobre lo que debería ocurrir. Son historias construidas a conciencia y mediante el diálogo para prefigurar lo que podría ocurrir en los próximos 15 años. Cada una de ellas contiene elementos que pueden no ser mutuamente excluyentes con otros escenarios.

Uno de los puntos de partida para el ejercicio realizado por el Equipo de Escenarios fue la certeza conjunta de que el arraigo del sistema democrático es un objetivo deseable y posible pero no inercial. Se comparte la convicción de que las democracias de la región deben ir mucho más allá de lo que se ha logrado hasta hoy, con grados de maduración que varían según cada país. No se puede negar que la organización periódica de elecciones existe a nivel general, pero aunque se vive sin los autoritarismos del pasado, el grupo sostiene que las democracias de América Latina tienen todavía mucho espacio para seguir progresando.

La noción de democracia en este documento no se limita por tanto a los sistemas electorales sino que abarca otros conceptos de similar importancia como el Estado de derecho, el respeto y la protección de las libertades civiles y los derechos humanos, y la libertad de asociación y participación de la sociedad civil.

Los escenarios plasman algunas posibilidades en materia de las alternativas que existen para garantizar el efectivo contrapeso entre poderes, la renovada legitimidad de las instituciones, los mecanismos de prevención de la corrupción y la adecuada rendición de cuentas. También reconocen como prioridades el fortalecimiento de los partidos políticos, las nuevas formas de participación democrática, los modelos de desarrollo más productivos, incluyentes y sostenibles, la defensa ante el acecho de la violencia y el crimen organizado, la expansión de las libertades civiles y políticas, la vida en las ciudades y la integración regional.

El futuro no está escrito de antemano sino depende de un complejo y en muchos casos impredecible entramado de decisiones individuales y colectivas, sobre la forma en la que los latinoamericanos afronten sus problemas actuales y saquen provecho de las múltiples oportunidades, así como del contexto internacional que incidió y sigue incidiendo en las opciones de la región.

Por esa razón, los cuatro escenarios a continuación demarcan lo que podría ocurrir si los individuos y las instituciones emprenden uno u otro camino. La realidad será una si se transita por las vías de renovación y reforma, y otra si se antepone la disputa de poder y la tensión entre diversas fuerzas políticas y económicas bajo una democracia aparente y superficial. Un conjunto de situaciones específicas prevalecerá si es la sociedad civil la que impulsa nuevas formas de movilización democrática y presión popular más allá de la acción estatal, o si lo que predomina es el secuestro de la democracia en buena parte del territorio latinoamericano por parte del crimen organizado, la violencia, la impunidad y todo tipo de actividades ilegales.

Este ejercicio de escenarios posibles se lleva a cabo en torno a una región que se reconoce por su gran diversidad y complejidad. El punto de partida es la evidencia de que en algunos países, e incluso subregiones, lo que está en juego es la profundización de la democracia; mientras que en otros países está en vilo la esencia misma de esa forma de organización colectiva. En unos casos se discute sobre las características y el alcance de los valores democráticos por excelencia y en otros lo que se debate es la vigencia de las garantías mínimas. Sin embargo, lo que el EE reconoce es que el destino colectivo de la región está íntimamente ligado a la forma en la que se conciba individual y colectivamente a la democracia y sus instituciones en los albores del siglo XXI.

Se propone por ello una aproximación holística e integral en la que se enfatizan los retos comunes y el potencial regional para asumir las riendas de un sueño y una responsabilidad compartida encaminada a lograr una región más justa, próspera y segura y que despliegue por fin todo su potencial en el nuevo siglo.

Características de los Escenarios

Los escenarios son hipótesis de futuro que se enmarcan en una narrativa internamente coherente. Pretenden, por ello, ser **relevantes, desafiantes, factibles y claros**, puesto que solo así serán **útiles** para el propósito definido previamente.

De los criterios ilustrados en el diagrama a la derecha depende que los escenarios sean útiles, lo que implica que cada historia debe respaldar el diálogo exploratorio sobre los futuros posibles y ser una base para adoptar en forma colectiva las mejores decisiones posibles.

RELEVANTES

Porque cada historia tiene ciertas implicaciones que, en mayor o menor medida, impactan en forma tangible el futuro de cada ciudadano latinoamericano.

DESAFIANTES

Porque cada historia pretende confrontar los modelos mentales adquiridos y las percepciones predominantes para así ampliar y enriquecer en lo posible la perspectiva desde la que se analiza lo que podría pasar.

~ ESCENARIOS ~
PARA EL FUTURO
 DE LA
DEMOCRACIA
 EN AMÉRICA LATINA
 2015-2030

FACTIBLES

Porque cada historia cumple con los requisitos para asumir lo que podría ocurrir, así no sea muy probable que ocurra.

CLAROS

Porque cada historia tiene unas características específicas, su propia lógica interna y debe estar al alcance de la comprensión de líderes y ciudadanos de la región.

Presentación de la metodología

La planificación por escenarios es una metodología que se desarrolla desde hace varias décadas en las principales empresas y organizaciones del mundo, pues se ha comprobado su gran utilidad a la hora de adoptar decisiones estratégicas en contextos sociales, económicos y políticos complejos. Fue desarrollada inicialmente como una forma de identificar los desafíos emergentes en el entorno militar y luego en el mundo empresarial para así explorar las posibilidades del futuro y trazar estrategias corporativas con una visión más holística de las oportunidades y los riesgos.

La metodología probó ser útil también en contextos sociales, económicos y políticos complejos desde que se aplicó en Sudáfrica, en la década de 1990, para enfrentar los desafíos de la transición democrática. Desde entonces, y bajo la denominación de planificación *transformadora* por escenarios, ha sido implementada en varios países y entornos distintos, dando como resultado el desarrollo de un lenguaje nuevo y compartido y nuevas perspectivas y puntos de vista que mejoran el entendimiento sistémico de problemas complejos, así como el establecimiento de nuevas relaciones y nuevas intenciones que facilitan la solución de problemas a través de la acción colectiva.

La metodología de la planificación transformadora por escenarios tiene seis instancias orientadas a la definición de los escenarios posibles y al acuerdo sobre acciones concretas en torno a los aprendizajes obtenidos a lo largo del proceso:

A partir de este esquema, se buscan cinco tipos de resultados que son las bases para la acción colectiva efectiva (véase el cuadro de resultados en la parte superior derecha del diagrama).

El punto de partida

- una situación inaceptable o insostenible
- un actor aislado no puede cambiar la situación
- cambios directos son imposibles o insuficientes

Convocar al equipo de escenarios

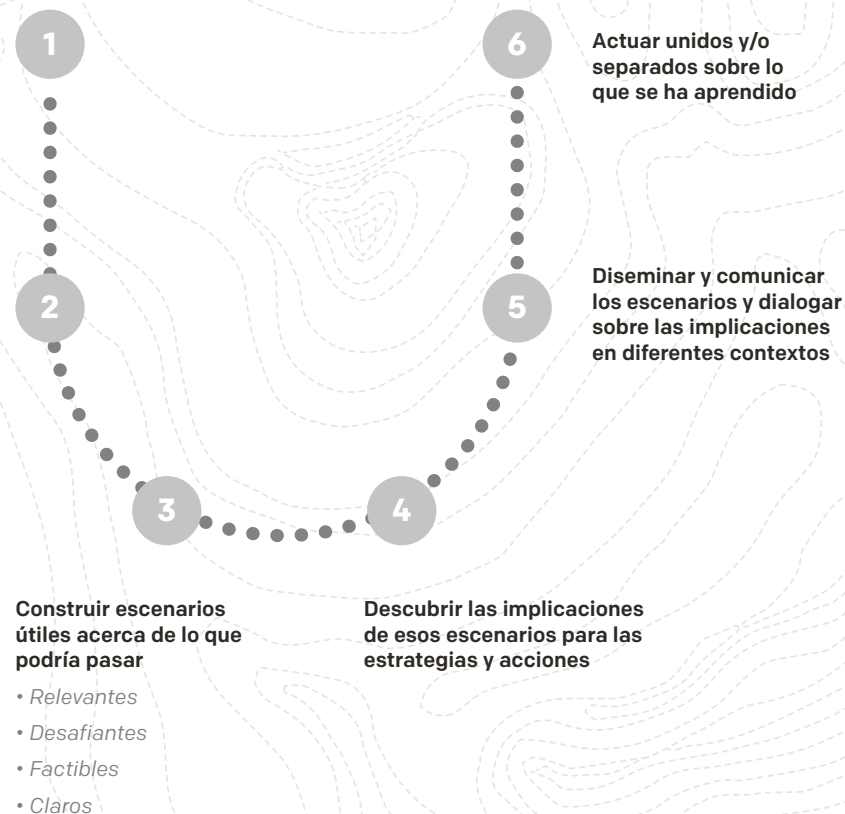
- Representativo del sistema
- Reuniendo poderes de acción
- Dispuestos a dialogar y co-crear
- Conocedor y experimentado

Observar lo que está ocurriendo en el sistema

- ¿Cuáles son nuestras preocupaciones?
- ¿Cuáles fuerzas impactarán nuestro futuro?
- ¿Cuáles son nuestras grandes certezas e incertidumbres?

RESULTADOS

- Lograr **ENTENDIMIENTOS** sistémicos sobre el pasado, el presente y los posibles futuros de las democracias de la región.
- Establecer **RELACIONAMIENTOS** entre diferentes partes del sistema y entre los distintos grupos de interés para facilitar así el trabajo en conjunto sobre objetivos comunes.
- Precisar la **INTENCIONALIDAD** de las personas que conforman el sistema completo, definiendo así compromisos específicos sobre lo que debe hacerse a la luz de los escenarios.
- Definir las **CAPACIDADES** necesarias para liderar cambios sistémicos.
- Emprender las **ACCIONES** en las que los líderes y ciudadanos involucrados transforman efectivamente su realidad.



¿Cómo se construyeron los *Escenarios para el Futuro de la Democracia en América Latina* y qué viene después?

Fases del proceso

1. EQUIPO DE ESCENARIOS (EE)

El proceso de construcción de los escenarios para América Latina inició en 2014 bajo el auspicio de las entidades convocantes con la identificación de un equipo de 37 lideresas y líderes influyentes de la región, representativos de distintos ámbitos de la sociedad como la política, la academia, el sector privado y la sociedad civil, quienes son los que conforman el Equipo de Escenarios.

2014

2. CICLO DE ENTREVISTAS

Luego siguió una ronda de 65 entrevistas a personajes y actores clave de la región, entre los que se incluyó a todos los miembros del EE. Dichas entrevistas sirvieron como guía inicial para establecer las variables temáticas fundamentales del proceso.

3. CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS

El EE se reunió en diciembre de 2014 y en enero y abril de 2015 en tres talleres de trabajo para la construcción de los escenarios, cada uno de tres días. Se logró congregar en cada taller una amplia gama de perfiles y perspectivas (sectoriales, ideológicas, profesionales, académicas, etc.) con la capacidad de emprender una aproximación holística a las distintas oportunidades y desafíos del sistema democrático en la región en el futuro a corto, mediano y largo plazo.

2015

4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Con base en los escenarios propuestos, se diseñó una fase de comunicación y difusión que busca posicionar mensajes clave sobre los desafíos de la democracia en la región y forjar compromisos acordes con las narrativas formuladas. De este modo, el proceso liderado por los integrantes del EE busca impulsar y promover estrategias con incidencia en la opinión pública, en el debate académico y en la acción política, que sean así un respaldo primordial y vinculante para el diálogo y la acción en América Latina.



ESCENARIOS PARA EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA (2015 – 2030)

El punto de partida común de los cuatro escenarios:

América Latina recibe el 2015 en medio de una encrucijada. No hay un balance inequívoco del progreso democrático de la región. Según el Banco Mundial, entre 70 y 90 millones de personas han superado la pobreza en la década precedente. La productividad sigue siendo baja y la dependencia de las exportaciones alta, pero se ha avanzado mucho en los fundamentos macroeconómicos y financieros que garantizan mayor estabilidad. La comunidad internacional recalca con frecuencia que los latinoamericanos definitivamente han dejado atrás su pasado reciente y ominoso de dictaduras y autoritarismos y lo han sustituido con gobiernos elegidos en forma democrática, prácticamente en todos sus países. A su vez, el fortalecimiento de la democracia está reconociendo y demandando instrumentos y liderazgos que interpelen las formas tradicionales y que tengan la capacidad para ofrecer respuestas a los nuevos retos sociales, económicos, políticos y medio ambientales.

LA DEMOCRACIA EN
**TRANS-
FORMACIÓN**

LA DEMOCRACIA EN
TENSIÓN

LA DEMOCRACIA EN
**MOVILI-
ZACIÓN**

LA DEMOCRACIA EN
AGONÍA

Sin embargo, el ciclo económico positivo y el notable crecimiento del PIB que ha caracterizado a la región en los pasados diez años llega a su fin. El contexto internacional deja de ser favorable. Todo parece indicar que los buenos tiempos económicos no van a volver, al menos en el corto plazo. La región todavía se destaca en el contexto mundial por sus alarmantes niveles de pobreza, desigualdad e inseguridad. La ingente población joven enfrenta retos cada vez más complejos desde el punto de vista de formación, inserción laboral y participación ciudadana. Cerca del 30% de latinoamericanos vive en la pobreza, lo que corresponde aproximadamente a 170 millones de personas. Un porcentaje abrumador de países se encuentran en una posición de desventaja ante los desafíos de la globalización por los rezagos en infraestructura, la insuficiente competitividad y la escasa calidad educativa. Además, diversas encuestas reflejan que la principal preocupación de los latinoamericanos es la inseguridad, muy por encima de otros problemas estructurales graves como la pobreza y la desigualdad.

Muchos ciudadanos opinan que las formas democráticas de varios gobiernos latinoamericanos se reducen a votaciones periódicas de resultados predecibles que coexisten con nuevas formas de represión a la libertad de expresión y restricciones al pluralismo político, la división de poderes y demás comportamientos de tinte autoritario. A su vez, centenares de miles de ciudadanos siguen irrumpiendo masivamente en las calles para protestar, en unos casos por la exigencia de estándares mínimos de vida, en otros por el incremento de las expectativas sociales, y en otros más como protesta contra la corrupción y la falta de transparencia en el ejercicio de la función pública. Las perspectivas económicas y sociales parecen guardar una correlación inversamente proporcional con las mayores expectativas sociales: mientras que las primeras tienden a reducirse, las segundas tienden a aumentar. La conflictividad social parece ser un rasgo extendido de la construcción democrática latinoamericana, así como el incremento de la población urbana que llega a un porcentaje cercano al 80% y la ausencia de la variable ambiental como ordenadora de la sustentabilidad. Latinoamérica descubre que tiene en las redes un reto y una oportunidad expresada en movilización, transparencia y educación.

Tabla comparativa de los cuatro escenarios

	La democracia en TRANSFORMACIÓN	La democracia en TENSIÓN	La democracia en MOVILIZACIÓN	La democracia en AGONÍA
ESTRUCTURA DE PODER	Escenario de la redistribución del poder.	Escenario de la concentración del poder.	Escenario de la desconcentración del poder y de la interpelación al poder tradicional.	Escenario del predominio del poder del crimen organizado y la violencia.
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y CULTURA POLÍTICA	Se busca revalorizar la política y mejorar la capacidad de gobernar con mayor eficiencia y transparencia a partir de reformas estructurales con miras en la profundización del ejercicio de derechos ciudadanos, de los mecanismos institucionales de participación social y del fortalecimiento del sistema democrático a través de mayor inclusión y pluralismo.	Fenómenos dispares como una nueva reconfiguración de liderazgos en unos casos y la cultura caudillista tradicional en otros, expanden la concentración de poder, erosionan los controles y contrapesos institucionales, generan disputas permanentes por el poder y condicionan el ejercicio democrático.	La frustración con el modelo democrático tradicional genera un fenómeno de interpelación permanente a partir del trabajo estratégico en redes, la presión popular y la apropiación de nuevas tecnologías por los ciudadanos, y los movimientos sociales.	Se socavan las instituciones y se consolidan esquemas de gobernabilidad que debilitan el ideal democrático en muchos territorios de la región debido a la mayor sofisticación del crimen organizado que penetra al Estado, el recrudecimiento de la violencia, el avance de la corrupción, el predominio de la impunidad y el apego a soluciones autoritarias.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Mayores incentivos, mejores mecanismos de participación y mayor énfasis en la educación ciudadana para la reconstrucción de una ética civil llevan a la conformación creciente de un electorado más exigente y con mayores niveles de participación en los esquemas tradicionales de representación y a una colaboración generalizada entre sociedad y Estado.	Prevalencia del voto cautivo, disminución de la participación electoral, ausencia de información fidedigna y aumento de la desconfianza hacia lo público.	Factores como los nuevos esquemas de cooperación horizontal, el activismo en redes paralelas y la expansión de la movilización social generan mayor presión al Estado, cuestionan el voto como mecanismo efectivo de influencia y engendran un empoderamiento ciudadano más extendido y una apropiación colectiva de intereses comunes más allá del tradicional esquema representativo.	Se instala en la ciudadanía el silencio, el temor, la autocensura y la doble moral, y se experimenta una degradación notable de los valores cívicos en territorios y provincias de la región.
DESARROLLO ECONÓMICO E INCLUSIÓN SOCIAL	Predominio de modelos alternativos de desarrollo sostenible y de políticas redistributivas más efectivas para superar los desafíos estructurales de pobreza y desigualdad con mayor productividad y mejores salarios.	Supremacía generalizada de soluciones cortoplacistas y prevalencia de la eficiencia económica sobre la justicia social y el equilibrio medioambiental, lo que impide una redistribución más equitativa de poder e ingreso.	Surgimiento de innovadores modelos incluyentes de desarrollo económico local menos dependientes del Estado y con nuevas formas de comercialización basadas en modelos de economía sustentable y justa y en el trabajo en red.	Acentuación de la pobreza, la desigualdad y el desequilibrio ambiental dada la ausencia de garantías para el crecimiento incluyente y la inoperatividad de los mecanismos redistributivos del Estado.
INTEGRACIÓN REGIONAL	Agrupamiento afianzado de varios países en bloques comerciales y políticos que insertan con mayor fuerza a la región en el mapa global.	Tendencia al cortoplacismo que lleva a la desaceleración de la integración regional y a la consecuente pérdida de competitividad con otras regiones del mundo.	Desarrollo de nuevas formas de intercambio e integración territorial regional y de nuevas agendas para organismos multilaterales a partir de la influencia de las redes.	El dinamismo de los mecanismos informales e ilegales de la integración regional supera con creces los lentos avances en la suscripción de acuerdos regionales y soluciones compartidas.



La democracia en

**TRANS-
FORMACIÓN**

LA DEMOCRACIA EN

TRANS-
FORMACIÓN

DEMOCRACIA EN TRANSFORMACIÓN

En este escenario, América Latina experimenta una demanda generalizada para el replanteamiento de las instituciones democráticas que permita superar progresivamente los problemas estructurales más apremiantes y lograr una mayor inserción de la región en el mapa global. Cada país de la región debe lidiar con una realidad en la que la adaptación a las oportunidades y los desafíos de la globalización en sus múltiples vertientes, impone mayor presión para concertar reformas institucionales que tiendan a mejorar la calidad de la democracia y a incrementar la satisfacción de los ciudadanos y el cumplimiento de sus aspiraciones. De este modo, en un número creciente de países se generan las condiciones para que sean las propias instituciones las que promuevan transformaciones de largo aliento en áreas críticas en las que antes predominaban los intereses particulares. Los resultados son dispares según cada país de la región, pero resulta evidente la demanda generalizada por un nuevo modelo de democracia más pragmático que supere los límites de los esquemas tradicionales. En ese contexto, algunos países demuestran que sí es posible superar gradualmente ciertas inercias estructurales que hasta ahora habían impedido reducir la desigualdad y la violencia y así lograr que las organizaciones fundamentales del Estado representen de forma genuina los intereses de una sociedad diversa. Es el escenario del fortalecimiento de la democracia en la región y de la innovación institucional.

Desde **2015**, la desaceleración económica llega acompañada de un ciclo ininterrumpido de denuncia ante múltiples casos de corrupción en varios países de la región. Algunos de los gobiernos elegidos o reelegidos en el ciclo electoral de 2014 y alrededores, se ven envueltos en escándalos de corrupción y extralimitación de poder que rebasan la paciencia de los electores. Se destapan nuevas evidencias de malversación de fondos de empresas estatales. Se difunden más pruebas de saqueo al erario sobre recursos destinados a obras públicas e inversión social, así como de conflictos de intereses. Se ventilan nuevos casos de abusos del poder ejecutivo sobre jueces y congresistas que ponen en vilo los sistemas de controles y contrapesos. Se divulgan otros casos de transgresiones a la ley por parte de poderosos empresarios que quedan en la impunidad gracias a sus conexiones con el poder político. Se difuminan en algunas partes los diques de contención que separan al Estado de la injerencia religiosa. Arrecian los ataques de algunos mandatarios sobre la libertad de expresión. Otros formulan nuevas estrategias democráticas solo en la apariencia para mantenerse más tiempo en el poder. Y otros, a nivel regional y local, demuestran su permanente connivencia con el

LÍNEA DE TIEMPO

2015 • págs. 14, 15

2018 • págs. 16, 17, 18

2020 • págs. 16, 17, 18

2022 • págs. 16, 19

2025 • pág. 17

2026 • págs. 17, 19

2030 • págs. 18, 19

crimen organizado, lo que incluso lleva a que se repitan las desapariciones y los asesinatos de personas incómodas al gobierno. En otros casos, gobernantes con un mayor compromiso con la transparencia llegan a una debacle de descrédito porque no han podido materializar en la realidad las aspiraciones políticas y sociales propuestas en campaña. Mientras tanto, se presentan preocupantes retrocesos en los índices de pobreza y desigualdad, que comprueban la fragilidad de los avances logrados hasta el momento. Es la clase media, en particular, la que experimenta un declive en sus niveles de vida.

Diversos estudios y encuestas demuestran que el desprestigio de las instituciones democráticas y el deterioro de la confianza política entre la ciudadanía es quizá el síndrome que con mayor fuerza se esparce a lo largo del territorio latinoamericano. Señalan que los partidos políticos han sido debilitados y cooptados por poderes fácticos y su impopularidad sigue creciendo. A los ciudadanos les cuesta cada vez más identificar a muchos de los partidos existentes en la región con una plataforma política específica que sirva de intermediación ideológica entre los candidatos propuestos y el porcentaje de la sociedad que los elige. La caída de la participación electoral es, entre otros, un rasgo reiterativo que socava la legitimidad de los gobiernos a nivel nacional y local.

El resultado es el de una región que se caracteriza por un agotamiento notorio del ciclo político vigente y por un hastío inocultable hacia la corrupción, el abuso del poder, la impunidad y la polarización, especialmente de parte de una clase media emergente que acumula al mismo tiempo aspiraciones más sofisticadas y mayores frustraciones pues muchas de sus demandas políticas no han sido satisfechas. A ello se suma un contexto de escasez que difiere en buena medida de la bonanza que se vivió en años anteriores. Por eso, con el advenimiento de un nuevo ciclo de elecciones, alrededor de **2018**, emergen distintos tipos de reacciones ante la indignación ciudadana con un denominador común: ya no resulta tolerable para un gran porcentaje de la ciudadanía latinoamericana que las instituciones democráticas de la región sucumban ante la ausencia de transparencia y la imposibilidad de brindar respuestas efectivas a retos inaplazables, especialmente a los que se relacionan con la desigualdad y la inseguridad. La indignación de siempre lleva ahora a una mayor politización de la ciudadanía y la indiferencia de antes se convierte gradualmente en una mayor parti-

cipación en el debate político y un mayor compromiso con los asuntos públicos. El rechazo a la corrupción y a la inoperancia del Estado pasa del estado pasivo al activo. Así como en siglos y décadas anteriores se generó una conciencia que califica como inaceptable sin ningún atenuante, la esclavitud o la discriminación por cuestiones de raza, género o etnia ahora empieza a germinar una nueva conciencia en la que resulta inaceptable no contar con instituciones democráticas sólidas, transparentes y a la medida de los retos que plantea el siglo XXI.

Desde el seno de la clase media y de los movimientos civiles, que una y otra vez han demostrado ser el principal motor de cambio en la historia de la región, se exige a la política y a la administración pública un piso mínimo de transparencia y eficiencia para alcanzar diversos fines sociales. La demanda por una evolución en las democracias de la región en varios países proviene en muchos casos de jóvenes y mujeres, que rompen así las cadenas subsistentes en sociedades ancestralmente patriarcales, y de pueblos indígenas, afrodescendientes y población LGTBI, que se erigen en motores del cambio al derrotar la discriminación a través de masivas campañas de ideas y propuestas en defensa del avance material y el progreso moral como fines de la acción pública en un contexto garantista de los derechos de los ciudadanos. Se trata, pues, de un creciente electorado, mayoritariamente urbano, más exigente y capacitado en las virtudes cívicas y en las posibilidades de la tecnología.

Lo anterior lleva al surgimiento en ese nuevo ciclo político en un proceso cuya nota predominante en algunos casos es la formulación de propuestas que canalizan las demandas ciudadanas y que buscan forjar una visión compartida de futuro en medio de la diversidad a través de un nuevo paradigma institucional que provee mecanismos más efectivos de participación. Surgen con mayor fuerza algunas opciones políticas, encarnadas en personas ajenas a las intrigas tradicionales del poder, que renuevan el funcionamiento de los partidos tradicionales o que establecen nuevos partidos y movimientos políticos. Las metas trazadas son claras: exigir a las élites políticas y económicas tradicionales cambiar las reglas de juego para afianzar las instituciones democráticas, incentivar la reconstrucción de una ética civil más extendida y mejorar la capacidad de gobernar. Con este impulso, algunos partidos tradicionales ingresan en la era de cambio para recuperar su prestigio y valorizar de nuevo el ejercicio

LÍNEA DE TIEMPO

2015 • págs. 14, 15

2018 • págs. 15, 16, 17, 18

2020 • págs. 16, 17, 18

2022 • págs. 16, 19

2025 • pág. 17

2026 • págs. 17, 19

2030 • págs. 18, 19

de la política, recobrando poco a poco la capacidad de movilizar e inspirar a sus votantes a partir de ciertas creencias compartidas. Ello supone una bocanada de aire fresco para la renovación institucional y se rompe gradualmente el círculo vicioso de polarización política y estancamiento administrativo. A través de la prédica con el ejemplo y de mayores y mejores instrumentos de fiscalización, en varios casos se reduce poco a poco la tolerancia cultural hacia la corrupción. Además, la incorporación transversal de la dimensión de género se revela como una garantía para el mejor funcionamiento del Estado y de las instituciones. Se promueve así el cambio y la reforma desde las instituciones a través de una hoja de ruta deliberada más allá de las coyunturas electorales para sacar adelante reformas específicas orientadas especialmente a la resolución de los principales desafíos estructurales de la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y, en muchos casos, la impunidad. Los analistas destacan que todo ello supone un cambio abrupto con respecto a la tendencia generalizada en la región de promulgar soluciones artificiales, inmediatas e improvisadas que la condenan al atraso. El cambio, concluyen, exige grandes dosis de constancia y optimismo. Lamentan, no obstante, que la evolución se materialice solo en algunos casos, y que en otros no haya signos visibles de cambio efectivo para el fortalecimiento de la democracia.

Muchas de las reformas propuestas, además de reforzar el equilibrio entre poderes, se orientan a cambiar el funcionamiento de los partidos, que se enmarcarían ahora en un contexto normativo y cultural que los concibe más como voceros legítimos de los intereses de la sociedad que como maquinarias electorales. Además, se busca apuntalar la acción efectiva del gobierno mejorando su capacidad de ejecución. La prioridad declarada es la de tener Estados más funcionales y mejores políticas públicas al servicio del bien común y no de intereses particulares. Se parte de la premisa de que el Estado debe representar efectivamente a los ciudadanos y canalizar debidamente las demandas concretas de los distintos sectores de la población. En esa medida, en varios países se implementan innovaciones en materia de deliberación y participación ciudadana que tienden a corregir en lo posible los vacíos y las carencias de la democracia representativa tradicional, pero sin alterar sus bases conceptuales. La idea es lograr un adecuado balance entre la representación y una participación que no sea antagónica a la figura estatal sino que,

por el contrario, se ejerza dentro del marco institucional vigente.

Se promueve, en consecuencia, un amplio conjunto de innovaciones para fomentar una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones políticas como las reformas al sistema de partidos políticos o al sistema electoral, que incluyen medidas para que los migrantes sean reconocidos como ciudadanos de pleno derecho y a los que se les facilita mucho más su participación electoral a distancia. Se trata de innovaciones que provienen del Estado, no de la sociedad. De este modo, desde **2018** se registra el lento viraje de algunos países latinoamericanos hacia un nuevo marco institucional más inclusivo y a tono con la realidad global. Las reglas de juego empiezan a cambiar a favor de la inclusión, la ciudadanía activa y la productividad. De hecho, muchos denominan la década de **2020** como la de la nueva ola reformista en América Latina para una profunda renovación de la democracia. Sus resultados, sin embargo, varían de un lugar a otro: en algunos países el talante reformista se traduce en una renovación institucional; en otros solo se materializan transformaciones parciales; y en otros más, las buenas intenciones naufragar ante las presiones de los grupos de poder tradicionales. En los casos que se resaltan como positivos, lo que se percibe es la maduración de un modelo más pragmático de democracia, en el que no hay un predominio claro de los elementos de representación y participación, sino la continuación y afianzamiento de diversos experimentos de interacción entre el Estado y la sociedad civil para concebir y ejecutar exitosamente, tanto las reformas estructurales de diverso tipo como las políticas públicas a nivel nacional y local.

Las innovaciones también se materializan en el ámbito educativo, bajo la certeza compartida de que se trata de la palanca más igualitaria que existe. Los progresos en la región han sido relevantes pero insuficientes en términos comparativos con el contexto mundial. Por eso, hay países en los que se unen partidos políticos, empresarios, sociedad civil y sindicatos para mejorar la calidad de la educación que está al alcance de todos, no solo de los más privilegiados, y ofrecer así mejores herramientas para sobresalir en la era de la información, la tecnología y el conocimiento. Al llegar un nuevo ciclo electoral en **2022** y cercanías, resulta patente en varios países que existe una voluntad política que reconoce a la educación pública, gratuita, laica y de calidad, con énfasis en la formación cívica, el empoderamiento político y el emprendimiento económico, como una prioridad de Estado a largo plazo. Se

LÍNEA DE TIEMPO

2015 • págs. 14, 15

2018 • págs. 15, 16, 17, 18

2020 • págs. 16, 17, 18

2022 • págs. 16, 19

2025 • pág. 17

2026 • págs. 17, 19

2030 • págs. 18, 19

priorizan los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para invertir en capital humano y apoyar una cultura emprendedora como eje vital de la generación de empleo, la innovación, el crecimiento económico, la disminución de la pobreza y la productividad a largo plazo.

Aunque los frutos de tales esfuerzos solo son visibles al cabo de una generación aproximadamente, y los resultados de diversas pruebas educativas muestran avances aún incipientes a lo largo de la década de **2020**, para el **2025** la región se precia como mínimo de haber erradicado del todo el analfabetismo y de haber conseguido avances notables, tanto en formación técnica y vocacional como en educación científica y humanística. La educación es ahora, en un alentador número de países, el eje rector desde el que se vertebran todas las políticas asociadas con el desarrollo, la inclusión, la innovación y la democratización de la sociedad. También hay excepciones en las que se registran retrocesos de toda índole en vez de avances. Como algunos países similares han logrado notables progresos, estas excepciones resultan aún más notorias en el contexto regional.

Por otra parte, las reformas estructurales buscan forjar sociedades más seguras. La mayor concertación entre distintos países con problemas comunes en la región desde **2018** permite ejercer una inocultable presión en la comunidad internacional para promover cambios sucesivos a lo largo de la década de **2020** en la legislación vigente en materia de narcotráfico. En algunos casos puntuales, las aproximaciones alternativas al consumo de drogas en la región permiten lograr un mayor control del microtráfico y, por consiguiente, reducir uno de los generadores de la delincuencia. En todo caso, se gesta un sólido acuerdo generalizado entre líderes políticos de la región con base en la idea de que la mejor forma de enfrentar el crimen organizado es a través de la vigencia del Estado de Derecho y no a través de las políticas de “mano dura” que llevarían a un retroceso en las garantías democráticas que con tanto trabajo se han construido en toda América Latina. Para **2026**, el centro de la lucha contra el crimen en la región oscila alrededor de los principios de la prevención, la inclusión social, las reformas de las fuerzas armadas, policía y sistema judicial, el acceso igualitario a una justicia pronta y eficiente y la coerción legítima del Estado dentro de los parámetros legales y constitucionales. Algunos países con gran experiencia en esta lucha se constituyen como guías, colaboradores y consejeros permanentes, fortaleciendo

así los canales de cooperación regional horizontal en la materia.

Las dimensiones del paulatino avance democrático en la región que se experimenta en buena parte de sus países desde **2018** no se limitan solo a la política. Para muchos líderes políticos, es en la economía en donde está el eje central de la acción democrática en la actualidad. La caída de los precios de los productos básicos de exportación, con los que tanto se lucraron muchas economías emergentes latinoamericanas a comienzos de siglo, lleva a muchas fuerzas políticas y civiles a respaldar reformas de distinto calado bajo la premisa que la única forma de aspirar a una prosperidad sostenible que permita garantizar una vida digna acorde con los valores democráticos es a través de mayor crecimiento, mayor productividad, mayor innovación y mayor equidad. En varios países latinoamericanos crece cada vez más el número de personas en todas las esferas de la sociedad a favor de la diversificación del modelo económico, y pregonan la idea de que el progreso ya no puede depender de otros países, menos en una nueva realidad multipolar. La globalización se posiciona progresivamente más como una oportunidad que como una amenaza en la deliberación pública latinoamericana.

Del mismo modo, los mercados y los inversionistas sienten mayor atracción por las ventajas que ofrecen la diversidad y la estabilidad de la región. En algunos países, de hecho, se produce una especie de reconciliación con la presencia y el rol de los empresarios, que requiere dejar de lado ciertas posturas ideológicas contrarias al sector privado. Se reconoce con mayor frecuencia que el rol de los empresarios es imprescindible y que sin ellos resulta imposible superar el umbral que divide al mundo desarrollado del subdesarrollado. También se reconoce con mayor asiduidad el valioso rol que cumplen los migrantes a países fuera de la región o entre países, cuyas remesas son vitales para el desarrollo y cuyos conocimientos y destrezas son indispensables para la diversificación de la economía.

El ciclo de reformas en la región lleva así a la consolidación de instituciones que demandan una mayor responsabilidad empresarial. En la mayoría de casos refuerzan la igualdad de oportunidades y al mismo tiempo estimulan la actividad económica innovadora y la inversión en nuevas tecnologías. Ante todo, y en parte gracias a nuevas leyes antimonopolio, pretenden evitar la concentración de ingresos y poder

LÍNEA DE TIEMPO

2015 • págs. 14, 15

2018 • págs. 15, 16, 17, 18

2020 • págs. 16, 17, 18

2022 • págs. 16, 19

2025 • pág. 17

2026 • págs. 17, 19

2030 • págs. 18, 19

en pocas manos que ha sido tradicional en la región. Se busca que el crecimiento económico beneficie a la gran masa de ciudadanos y no solo a unos pocos privilegiados. Las nuevas tendencias exigen sustituir el apego a los monopolios, subsidios y prebendas estatales y la avaricia de las utilidades a corto plazo o rentas de cualquier tipo, por una gestión en la que los valores de la responsabilidad corporativa estén al alza y los resultados sociales y ambientales tengan un peso similar al de los económicos. Varios empresarios, a quienes les caracteriza desde hace varias décadas su compromiso con el progreso de la región, ya han dado ejemplo en ciertos países al demostrar cómo una operación sostenible garantiza una mejor acogida de sus productos y servicios en los mercados internacionales. En contraste, otras grandes empresas siguen ancladas en el viejo modelo de depredación ambiental, de vulneración de los derechos laborales e injerencia indebida en las instituciones del Estado y de compadrazgo con algunos de sus representantes. Demuestran así su indiferencia ante la ola reformista que atraviesa toda la región. Esas empresas eventualmente son castigadas por los consumidores nacionales e internacionales.

En ciertos países, a su turno, el sector público asume de lleno su responsabilidad con políticas estables para mejorar las condiciones de seguridad jurídica, infraestructura y logística, atraer mayor inversión extranjera, reducir la “tramitomanía”, invertir más en investigación, ciencia y tecnología, aumentar la oferta y la calidad de toda suerte de bienes públicos y, en forma prioritaria, extender la democratización de la sociedad impulsando con mayor vigor las pymes, en lo que constituye una nueva ola de globalización en la que el emprendimiento y la formalización de la actividad productiva es la base. De este modo, cobra cada vez más fuerza en la región desde **2018** un proyecto común de economía mixta, solidaria y sostenible en el que las empresas y los gobiernos asumen roles complementarios y fines compartidos de eficiencia económica y justicia social.

La institucionalidad renovada logra que América Latina tenga en la década de **2020** un nuevo posicionamiento económico en un contexto global de crecimientos mediocres en el mejor de los casos y de retorno de crisis desestabilizadoras en el peor. Al interior de la región las condiciones son propicias para dar pasos ambiciosos hacia la integración que llevan, por ejemplo, a que en **2030** un número creciente de empresas compitan en pie de igualdad mundial con productos de alto

valor agregado cuyos componentes son elaborados en varios países latinoamericanos en cadenas de valor complementadas a lo largo y ancho del continente americano. Para **2030**, de hecho, se difuminan las fronteras profesionales para los jóvenes latinoamericanos, cuyos títulos universitarios son reconocidos no solo en un país de origen sino en la mayoría de países de la región y que expanden su horizonte laboral por la simplificación de los trámites para los permisos de trabajo. Lo propio ocurre al exterior de la región: en **2030** América Latina ha logrado una inserción más efectiva en el contexto global, especialmente con China y la región asiática, gracias a los avances en alianzas comerciales que permiten homologar normas técnicas, armonizar normas tributarias, facilitar la llegada de inversión extranjera y flexibilizar cada vez más la circulación de personas, capitales, bienes y servicios. La región aprende a ejercer un contrapeso efectivo que incide en su mayor relevancia geopolítica. Es ahora una región que brilla por las oportunidades que le brinda las características de su demografía, pues, en relación con otros espacios geográficos en el mundo, América Latina es un continente de millones de jóvenes en edad productiva, que alberga a una próspera clase media, que presenta mejores indicadores en derechos humanos y que influye positivamente en el incremento de los niveles de cooperación recíproca internacional.

Adicionalmente, es una región que resulta vital para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental del mundo. El progresivo posicionamiento económico proviene en buena parte de las reformas institucionales como de la inversión en investigación, tecnología y desarrollo agrícola para contribuir al incremento de la productividad y la sostenibilidad de la agricultura, que es para **2030** un núcleo esencial de los modelos de desarrollo sostenible. Finalmente empieza a cobrar forma la idea de una región que se erige en la despensa alimentaria del mundo gracias al oportuno aprovechamiento de sus cuantiosos recursos naturales. Lo que la naturaleza le ofrece gratuitamente a la región es ahora un elemento crucial para su crecimiento y desarrollo. En varios casos, las reformas institucionales se enfocan en conjugar la prosperidad colectiva con la sostenibilidad medioambiental, bajo la conciencia de que el futuro de la humanidad está en manos de los países con altos índices de biodiversidad. El mundo reclama, cada vez con mayor voracidad, los bienes y servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas privilegiados de la región, como agua

LÍNEA DE TIEMPO

2015 • págs. 14, 15

2018 • págs. 15, 16, 17, 18

2020 • págs. 16, 17, 18

2022 • págs. 16, 19

2025 • pág. 17

2026 • págs. 17, 19

2030 • págs. 18, 19

dulce, maderas, fibras y medicinas. Se crean así, en varios países de la región, empleos de buena calidad a través del biocomercio sostenible o de la inversión en proyectos de turismo ecológico, entre otros.

Todo lo anterior guarda un nexo directo con uno de los aspectos que más acapara la atención mundial en el siglo XXI: la desigualdad. Se registra en términos generales un mayor financiamiento de las políticas sociales que combaten la desigualdad y la pobreza y promueven el empleo calificado. Además del firme compromiso con la educación pública como vía prioritaria de movilidad social, existe un consenso manifiesto en varios países latinoamericanos para llevar a cabo reformas de ampliación de la base tributaria, de reducción a los impuestos directos que pagan todos por igual, de aumento en los gravámenes a las mayores rentas y, en suma, de la concepción de un modelo más progresivo, en consonancia con la mayor conciencia de los derechos sociales que ha ido calando en la población del continente. Es una forma propicia que encuentran algunos gobiernos específicos para persistir en las políticas redistributivas y para afianzar una estructura estatal que esté a la altura de los desafíos pendientes. Otros modelos de gobernanza, en cambio, persisten en la estructura impositiva tradicional o fracasan a la hora de implantar reformas en tal sentido ante la presión ejercida por algunos sectores.

Otra prioridad institucional evidente es la lucha contra la discriminación. Entre las demandas de cambio más habituales se incluye frecuentemente la necesidad de garantizar una efectiva ciudadanía democrática, lo que exige reforzar la separación de las políticas públicas, los currículos educativos y la administración pública de la religión. Surge así en algunas partes un influyente movimiento laicista, que une a varios creyentes y ateos por igual, por la defensa incondicional de la libertad religiosa pero solo en los límites estrictos de la esfera individual y privada. También exige un mayor énfasis en esfuerzos pluralistas para superar progresivamente la desigualdad de género y promover la participación activa de las mujeres. Así, las agendas feministas para demandar mejores salarios o desterrar símbolos patriarcales anclados en el pasado, entre otros, suman nuevos adeptos al constatar que las reivindicaciones de género son una de las mejores vías de reivindicar la ciudadanía democrática para todos los grupos sociales. En **2030**, un grupo mayoritario de los gobiernos, las empresas y las entidades sociales en la región está integrado y

comandado por un porcentaje mayor de mujeres, quienes gozan ahora de mejores condiciones laborales y sociales y quienes persisten así en la lucha por seguir posicionando sus pretensiones como un pilar fundamental de la ola reformista que se inauguró en la pasada década.

Este replanteamiento democrático en la región conduce a que en la mayoría de países se comparta una hoja de ruta colectiva y un norte común democrático y urbano. Sin embargo, y como se ha señalado previamente, el balance al llegar **2030** es para muchos agridulce, porque los resultados son dispares según cada país. En algunos casos se produce un salto cualitativo de desarrollo, progreso y equidad en el breve lapso de 15 años. Permanecen algunos rezagos pero los avances logrados no tienen precedentes en ningún otro momento de la historia. Hay algunas excepciones en las que se materializan unas reformas pero otras quedan inconclusas debido a que los plazos de negociación se sobreponen a la urgencia de la ejecución. En ciertos casos, las buenas intenciones sucumben en gran parte ante una precaria realidad presupuestaria que impide garantizar derechos básicos y un ejercicio pleno de la democracia ciudadana.

Sucede también en algunos países que la élite se resiste con todas sus fuerzas a los cambios propuestos. Incluso, en casos minoritarios, en **2022** y **2026** y alrededores llegan al poder caudillos con una clara tendencia a reprimir la protesta social y la libertad de prensa y a atajar los ánimos reformistas que corren por toda la región, o fundamentalistas religiosos que imponen sus propias creencias a las tendencias progresistas que inspira este ciclo reformista.

Varios de los líderes políticos de mayor protagonismo en esta década reconocen que no existen éxitos absolutos en el empinado camino ascendente de progreso democrático, pedagogía cívica y en el difícil paso de la tolerancia a la convivencia. La característica general que se vive día a día en la región es la del predominio creciente de una visión que sustituye la cultura de la polarización para fundir en un mismo ideal la profundización de la democracia, la regeneración de la política y el crecimiento incluyente y sostenible de la economía, más allá de los intereses mezquinos y de la tendencia al cortoplacismo. Se forma lentamente una nueva generación que se aleja de los liderazgos personalistas, caudillistas, mesiánicos, patriarcales y autoritarios y valora profundamente la democracia, las libertades individuales,

**LÍNEA DE
TIEMPO**

el pluralismo político, la libertad de expresión, la rotación en el poder y la deliberación pública. La mayor certeza y la más relevante enseñanza que se expresa en las nuevas cumbres de integración regional es que el futuro de América Latina es prometedor siempre y cuando siga siendo una construcción de nuevas generaciones en la que prima la voluntad colectiva y el bienestar común.



La democracia en

TENSIÓN



LA DEMOCRACIA EN TENSión

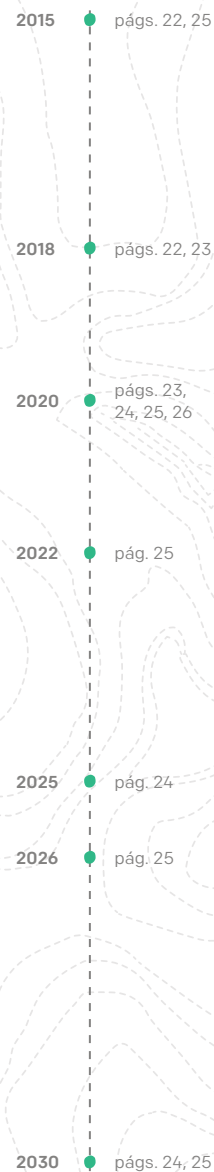
DEMOCRACIA EN TENSión

En este escenario, siguen predominando las lógicas inerciales de concentración o de reconcentración del poder político y económico, en una región que continúa marcada por una cultura política caudillista, clientelar y con resabios autoritarios. En algunos países y subregiones se registran avances sin precedentes en materia de derechos económicos, sociales y culturales, pero sin alterar de raíz el patrón de desarrollo concentrador ni las lógicas de la corrupción y la violencia, y aún bajo el auspicio de esquemas de poder que apuestan deliberadamente por subordinar a las instituciones democráticas. Algunos países atraviesan crisis políticas y se evidencian en algunos casos retrocesos autoritarios puntuales y de nuevo cuño, con consecuencias graves para la construcción institucional y el ejercicio de los derechos ciudadanos. En 15 años se lamentan todas las oportunidades que sigue desaprovechando la región para forjar genuinas democracias interculturales. La democracia en la región ha perdurado, pero muy pocos están satisfechos con las formas en que lo ha hecho. Es el escenario de la democracia en apariencia, de la tensión y las disputas de poder entre diversas fuerzas políticas y económicas y de la frustración ciudadana.

Desde **2015** surgen en varios países de la región movimientos reformistas que alertan que América Latina aún se destaca no solo por tener la distribución de ingresos más inequitativa del mundo sino que también sobresale por la inequidad política. Se basan en muchos estudios que demuestran que, sin perjuicio de la aparición de nuevos actores en la política en los años anteriores, la gran masa de ciudadanos no tiene acceso a las actividades políticas y económicas. En muchos casos son las mismas caras y los mismos apellidos los que siguen ocupando el poder. La informalidad representa un porcentaje abrumadoramente alto de la economía latinoamericana, equivalente a millones de personas que se ganan precariamente la vida fuera de los márgenes de las garantías y los derechos que ofrece el sistema democrático. Muchos afirman que los años de bonanza beneficiaron exclusivamente a las élites económicas de siempre, con lo que se concluye que los latinoamericanos aún no logran conciliar los niveles altos y constantes de desigualdad social con los valores inherentes de la democracia.

Para los movimientos reformistas en la región es claro que existe un estancamiento democrático que impide una redistribución más equitativa de poder y de ingresos. El poder en unos países sigue al servicio de los intereses minoritarios de las tradicionales y poderosas élites políticas y económicas nacionales e internacionales. Por ello, proponen en el nuevo ciclo electoral de **2018** y alrededores superar el estancamiento, cerrar las brechas estructurales entre Estado y sociedad y restaurar la confianza en las instituciones democráticas. En la otra orilla,

LÍNEA DE TIEMPO



sin embargo, se agazapan a la defensiva en algunos países ciertos líderes y movimientos políticos que se postulan o tratan de perpetuarse con la intención soterrada de consolidar la reconcentración del poder en la región y neutralizar la democracia desde la propia democracia.

En otros países, el poder lo detentan líderes muy populares que tras romper paradigmas logran avances cuantitativos en materia de reconocimiento de derechos sociales y culturales y, al mismo tiempo, en materia de crecimiento económico e inclusión social. Es un poder que ha generado una ola de entusiasmo que se traduce en la prórroga indefinida de sus mandatos y en la pérdida gradual de los controles y contrapesos que caracterizan al sistema democrático. Para muchos analistas, es un proceso de diversificación de élites representado por líderes con éxitos electorales reiterados y contundentes, pero que afrontan denuncias específicas de restricción a los derechos individuales, lo que les lleva a concluir que en esos países la democracia ha perdurado pero encarnada en la modalidad de un poder unimodal; son democracias en tensión. El desafío de ciertos movimientos reformistas en esos casos es, en cambio, el de la profundización de la democracia a través de la consolidación de una institucionalidad con mayor fortaleza e independencia. En esos términos se libra el combate en el nuevo ciclo electoral de la región en **2018**.

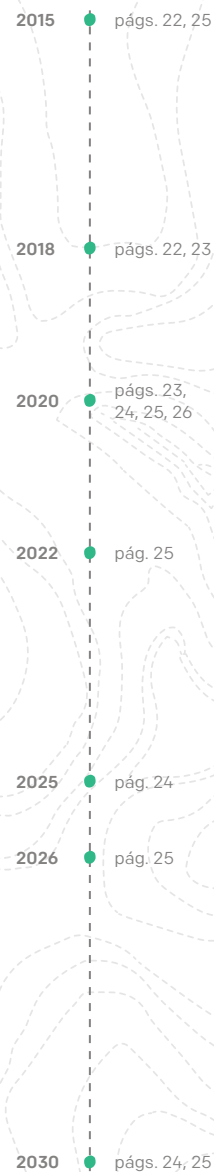
La promesa de los nuevos líderes reformistas en dichas contiendas electorales es la de obligar a las élites políticas y económicas a cambiar las reglas de juego para afianzar las instituciones democráticas y concertar una visión compartida de futuro nacional y regional. Aspiran, en consecuencia, a que los partidos tradicionales ingresen a la ola del cambio para recuperar el prestigio perdido. No obstante, las buenas intenciones se estrellan contra la evidencia compartida por muchos latinoamericanos de que los partidos tradicionales o los nuevos líderes sociales han emprendido en abundantes casos un camino sin retorno. Desde antes de **2018** dejaron de ser los intermediarios entre los intereses y las necesidades de los ciudadanos y las acciones y decisiones del gobierno de turno. Desde mucho antes dejaron de ser estructuras que se conformaban con base en una ideología específica. Además, se constata en varios casos que es el propio modelo democrático el que ha impuesto restricciones a reformas significativas. En muchas ocasiones, la posibilidad de emprender reformas depende de alianzas y coaliciones que cobran mayor o menor fuerza

según cada país, pero que en todo caso se enfrenta a la dificultad de una normativa institucional que hace muy difícil lograr cambios profundos. Algunos países cuentan con una arquitectura institucional que permite cierto espacio a las reformas, pero otros sufren de una parálisis que proviene del núcleo de su propio sistema político.

En suma, y por diversos factores, para **2018** la política en la región ha dejado de ser un servicio transitorio a la comunidad para ser con más fuerza una forma de ganarse la vida a perpetuidad. Desde hace varios años, los partidos son mayoritariamente maquinarias electorales y, tras la penumbra, grupos de representación de intereses corporativos en muchas ocasiones con apego a operar por fuera de la normatividad o a modificarla a su antojo. Se reconoce que la faceta electoral del sistema democrático funciona mayoritaria y relativamente bien. El dilema para los reformistas, empero, estriba en que el electorado independiente y con criterio propio en la región ya no confía en el sistema político, por lo que se ausenta de las urnas allí donde el sufragio no es obligatorio y prevalece el voto cautivo. El saldo tras la finalización del ciclo de elecciones es desalentador: en algunos casos prosiguen las mismas estructuras excluyentes de poder, en otros se reeligen opciones que para muchos presuponen un retroceso democrático, y solo en casos específicos se opta por la promesa de un salto cualitativo para la política democrática.

A lo largo de la década de **2020** continúa la configuración de un mapa político diferenciado en la región. A la luz de los resultados, muchos en la comunidad internacional se cuestionan si aún no hay un compromiso decidido de los latinoamericanos con un modelo más democrático de sociedad, al menos en su variable liberal, o si los latinoamericanos siguen asociando democracia solo con elecciones. Aducen las encuestas recientes que demuestran un bajo apego por los valores democráticos. Otros, por el contrario, asumen que la soberanía de las fuerzas económicas en cabeza de individuos particulares se incrusta por encima de la soberanía política. Sea como fuere, el ideal democrático en Latinoamérica sigue mayoritariamente en varios países al servicio de intereses particulares, de poderes ocultos, externos o emergentes y de individuos acaudalados e influyentes, gracias a una evidente complicidad entre el gobierno y los poderes fácticos, en muchos casos teñida de corrupción y en varias ocasiones engendrada por el apogeo de actividades ilícitas como el contrabando y el tráfico de drogas.

LÍNEA DE TIEMPO



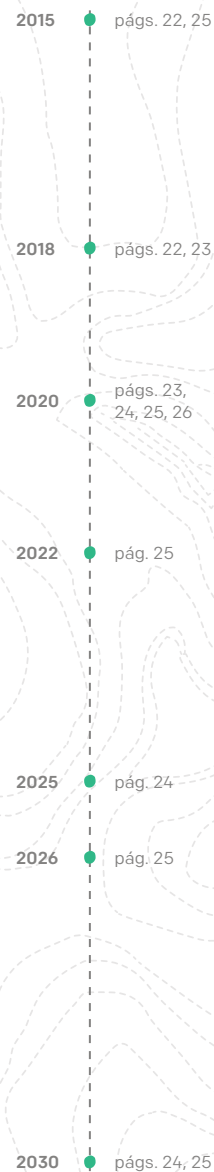
En algunos países siguen mandando “los de siempre” y en otros llegaron “los que nunca lo hicieron”, pero aun en estos últimos casos la inclusión simbólica y real en la sociedad no cambia de fondo el sentido de polarización. Sin embargo, las características predominantes de la región son los altos niveles de corrupción e impunidad, la persecución política y judicial a la oposición, el debilitamiento de la separación entre Estado y religión y el hostigamiento a la libertad de expresión, entre otros factores de menoscabo democrático en un contexto económico deteriorado que reduce la efectividad de los mecanismos de inclusión social. Por ello, la de **2020** es reconocida en muchos medios de comunicación e informes académicos como la nueva década perdida de América Latina. Las reformas para regular y limitar el ejercicio del poder siguen en el limbo. Las instituciones excluyentes han demostrado así su vocación de permanencia a lo largo de los siglos. A las únicas que sigue beneficiando este panorama es a las élites políticas y económicas.

Un influyente grupo de periodistas independientes de la región se une entre **2020** y **2025** en un esfuerzo conjunto con mucha resonancia a nivel mundial para superar la barrera de las restricciones a la libertad de expresión y sacar a luz los múltiples poderes económicos ocultos de la región, denunciando así lo que denominan como la devaluación, aún mayor que antes, del comportamiento cívico por una parte de quienes ostentan una posición de poder a lo largo de América Latina. Según las investigaciones, se trata de una élite que llega a la cúspide del poder gracias al intervencionismo, la ausencia de competencia y los estrechos nexos con la política y que impone una voracidad cortoplacista enfocada únicamente en las utilidades económicas. En una coalición de medios independientes se exhiben pruebas de cómo esa parte de la élite sostiene y financia cada paso del proceso de reconcentración de poder, promoviendo así sus propios candidatos a las instituciones democráticas e impulsando subsidios, regulaciones, sentencias y decisiones ejecutivas encaminadas solo a su propio beneficio, ligado sobre todo a las industrias extractivas y no a la actividad económica innovadora. En consecuencia, no terminan de cuajar los valores de la responsabilidad social en la mayoría de países y el único paradigma deseable de la acción del Estado es el de la eficiencia económica que continúa profundizando la desigualdad social.

La prensa independiente y algunos movimientos reformistas opositores denuncian así que las decisiones trascendentales para la sociedad provienen en varios casos de los grandes intereses económicos y políticos que, además, no rinden cuentas de sus actos ante los ciudadanos. El poder tradicional procura distorsionar los argumentos con los que se defiende la necesidad de un cambio que fortalezca las instituciones democráticas. Es por lo anterior que le concede tanta importancia al control de los medios de comunicación. En la década de **2020** pululan en América Latina los casos de restricciones a la libertad de expresión. La información que reciben los ciudadanos es considerada por muchos como uniforme y superficial. La Internet sirve en unos casos para unir pero en otros para fragmentar aún más a los ciudadanos. El ejemplo de agresividad e intolerancia política en el debate público salta de las instancias gubernamentales a los medios virtuales.

Son pocos los países de la región que llegan a **2030** con economías más diversificadas y productivas; y a menor productividad, menor integración regional para competir en pie de igualdad con otras regiones del mundo. El sistema de libre mercado no genera aún oportunidades para la mayoría de las personas. Varios países siguen dependiendo de la extracción de recursos naturales, de la exportación de bienes primarios y del consumo interno subsidiado. La regla general es la de un modelo de desarrollo que depende de los factores externos. La región como un todo no es capaz todavía de generar empleos suficientes, y menos aún empleos dignos y de calidad, ni de ser competitiva en el mercado global. No logra atraer suficiente inversión extranjera ni elevar los salarios reales, así como tampoco sacar provecho generalizado de la biodiversidad de la región como ventaja competitiva. Se frustran en varios casos los proyectos para promover la investigación en ciencia y tecnología que contribuyan a impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos o nuevas formas de productividad agrícola. Se agravan, además, los problemas ambientales, en perjuicio sobre todo de la población más pobre, que sufre las consecuencias de los cambios en patrones agrícolas, los desastres climáticos, el hambre y la falta de agua potable. El desarrollo de proyectos mineros y petroleros y de tala de bosques sigue afectando buena parte del ecosistema de la región. Varias comunidades rurales y pueblos indígenas incurren en especiales esfuerzos por preservar sus recursos ambientales, pero los resultados exitosos son insuficientes frente a la magnitud del problema.

LÍNEA DE TIEMPO



En tal contexto, otro proceso predominante de varios países de América Latina en los ciclos electorales de **2022 y 2026** sigue siendo el surgimiento o afianzamiento de gobiernos de talante eminentemente autoritario y caudillista, que despiertan al inicio grandes esperanzas en el electorado que los elige. Son gobiernos que suelen invocar la voluntad popular para justificar cada uno de sus actos, que se enmarcan usualmente en términos de mayor igualdad social. Sus líderes gozan de mucho carisma y constantemente invocan una narrativa que les permite forjar una mayor identificación con las clases populares y denunciar las falencias del sistema democrático tradicional.

A su turno, los opositores sostienen que son gobiernos ajenos a cualquier sentido de concertación, o que limitan los consensos a la agenda económica pero no a la política. Declaran que en ellos prima la polarización política y la descalificación del otro sobre el diálogo y la negociación, lo que debilita al máximo el debate público. Alertan que esos gobiernos buscan usualmente moldear las normas a su arbitrio y controlar, tanto el poder legislativo como la administración de justicia, en detrimento de la necesidad democrática de la separación de poderes. Denuncian cómo en ellos predominan los discursos grandilocuentes y el culto a la personalidad ante la ausencia de programas concretos y de mecanismos de rotación efectiva de poder. Adicionalmente, manifiestan que la administración estatal se llena de personas sin el conocimiento, la experiencia y la apertura mental necesarios para una responsabilidad pública. En muchos casos el Estado pierde su capacidad operativa y delega cada vez más la gestión pública en manos privadas. Como no hay controles, concluyen, hay menos mecanismos de veeduría y de prevención de la corrupción. Como tampoco hay garantías, la lucha contra el crimen organizado se libra desde la represión y no desde la prevención. En todo caso, en **2030** América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo. Los índices de violencia no recrudecen pero tampoco mejoran: subsisten en un espacio de “normal anormalidad”.

En otros casos, en donde las instituciones son más frágiles y las brechas socioeconómicas más amplias, ni siquiera es necesaria la presencia de un liderazgo caudillista definido para impedir una renovación democrática de raíz. Los mismos resultados en términos políticos se observan desde **2022** en contextos de apatía e indignación generalizados, que derivan en procesos de vacío de poder y de

inestabilidad. En algunos países con grandes niveles de descontento se produce un barrido del sistema de partidos tradicional y llegan movimientos electorales exitosos, pero la correspondiente gestión de gobierno deshace las promesas que sostenían al movimiento. Así, se mantienen los poderes estructurales y se deslegitima aún más la política pero por caminos diferentes a los mencionados. Con todo, en la mayoría de casos se profundiza el escepticismo y los ciudadanos se alejan de actividades cívicas y del trabajo en redes organizadas en torno a propósitos comunes. Predomina la desconfianza y la frustración que sumerge a la mayoría en la evasión de los asuntos públicos. Además, en casos específicos llegan al poder fundamentalistas religiosos que buscan extender la injerencia de sus preceptos religiosos en la esfera estatal, lo que supone un retroceso evidente para la vigencia de los derechos ciudadanos.

Al analizar la década de **2020**, los medios de comunicación independientes coinciden con los académicos al concluir que no hay una exigencia consistente de la ciudadanía para la planificación sistemática de un mejor porvenir. Algunas tentativas de reforma tributaria para balancear las cargas entre ricos y pobres y trazar mejores políticas redistributivas son abortadas en el proceso legislativo en ciertos países por parte de senadores y representantes, pues atentan contra los intereses de los poderes fácticos. El ritmo de reducción de pobreza y desigualdad que hubo en la primera década del siglo se frena considerablemente. El gasto social se enfoca no como inversión de capital humano a largo plazo sino como medio para mantener satisfecho a un electorado cautivo y dependiente del poder y consolidar un modelo de ciudadanía de baja intensidad. Las grandes ciudades crecen y en algunos casos colapsan por la incapacidad en la gestión pública para proveer elementos básicos como el agua.

En resumen, entre **2015 y 2030** la región como un todo no experimenta avances considerables en materia de pobreza, desigualdad, corrupción y violencia. Lógicamente, la región en **2030** es muy diferente de lo que era en **2015**, pero persiste un modelo democrático que difiere en la teoría y en la práctica. La noción de democracia deja de ser en varios países una construcción colectiva permanente y pasa a ser con mayor ímpetu una fachada detrás de la cual se esconde una poderosa plataforma para la defensa de intereses económicos y políticos particulares y en muchos casos ocultos. En contraste,

LÍNEA DE TIEMPO

2015 • págs. 22, 25

2018 • págs. 22, 23

2020 • págs. 23,
24, 25, 26

2022 • pág. 25

2025 • pág. 24

2026 • pág. 25

2030 • págs. 24, 25

otros países sí exhiben mayores progresos en la ampliación y profundización de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, se cuestiona que el entusiasmo generado por esos avances haya derivado paradójicamente en una debilitación de ciertos elementos constitutivos de la democracia como la alternancia en el poder y la independencia de los poderes públicos.

Como se ha mencionado, también se conforman nuevos espacios de resistencia entre **2020 y 2030** que revisten de nuevo dinamismo el debate público al oponerse de lleno al modelo de ciudadanía coercionada, condicionada y clientelar. Son grupos para los que la lógica del poder tradicional no tiene por qué ser la camisa de fuerza que siempre ha sido. En distintos países de la región se conforman movimientos populares y de jóvenes que provocan movilizaciones para interpelar al poder. Incluso han logrado revertir, bloquear o posponer decisiones que afectan derechos y libertades. Otros grupos que reflejan la diversidad de la sociedad civil al tratar de reivindicar las identidades étnicas, de género y de orientación sexual cobran mayor relevancia, sobre todo en los casos en los que se diluyen las barreras entre la acción pública y las creencias religiosas. Se consolida así cierto margen de influencia para, al menos, asediar la toma de decisiones y acorralar algunos procesos en contra de intereses ciudadanos. Varios sectores de la sociedad civil se confabulan para usar al máximo las posibilidades de las herramientas tecnológicas en defensa de causas comunes o para difundir información fidedigna a través de radios comunitarias y sitios independientes de Internet. Sin embargo, esos esfuerzos no son suficientes: el impulso de cambio no alcanza para ejecutar estrategias de transición democrática que supongan un salto cualitativo.

Al llegar a **2030**, los medios de comunicación más importantes del mundo coinciden en que no hay mucho que celebrar en lo que respecta al progreso de los elementos constitutivos de la democracia en América Latina. Por supuesto, hay diferencias entre países y, sobre todo, al interior de cada país. Con todo, la nota predominante para los principales medios del mundo es la ausencia de un adecuado equilibrio en el ejercicio del poder, o de la interacción equilibrada entre políticos, empresarios y líderes de la sociedad civil. Según ellos, no hay roles complementarios y definidos, sino un esquema de preservación de instituciones extractivas que cierra las puertas de la inclusión política, económica y social a la mayoría

de ciudadanos. Las encuestas a latinoamericanos corroboran que persiste baja confianza en la política y un déficit democrático crónico en la región que genera altos niveles de insatisfacción.

No solo los medios internacionales sino muchos analistas y académicos latinoamericanos afirman que la democracia de la región en **2030**, en efecto, es ante todo un rótulo bajo el que se disfraza el ejercicio de la política a las órdenes de intereses particulares de una estrecha élite de origen histórico o reciente, que prevalece a expensas del grueso de la ciudadanía. Los límites al ejercicio del poder son difusos, así como exigua es la distribución pluralista del poder al interior de la sociedad. La opinión mayoritaria es que las posibilidades colectivas de cambio y transformación en materia de justicia social, productividad económica, sostenibilidad ambiental y, en general, de ampliación de derechos y de garantías, siguen paralizadas en una importante proporción de la región, cuyos ciudadanos aprenden paulatinamente a rechazar de plano la política. Por eso, alertan que América Latina continúa sumida en el subdesarrollo democrático, sin importar que las expectativas y el potencial para su desarrollo sean mucho mayores. Así, para muchos, **2030** cierra una nueva década de oportunidades perdidas y frustraciones generalizadas para los latinoamericanos.



LA DEMOCRACIA EN

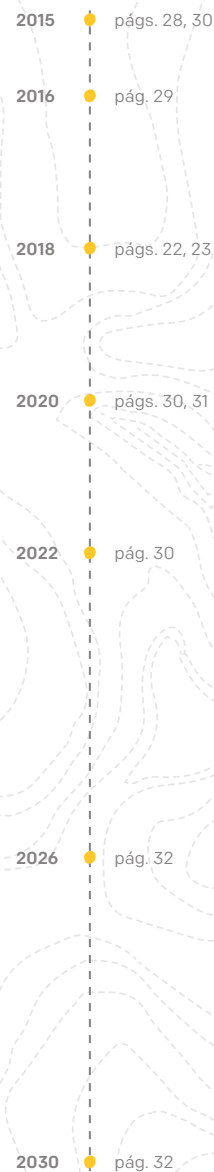
MOVILIZACIÓN

DEMOCRACIA EN MOVILIZACIÓN

En este escenario, la movilización social consolida su capacidad de interpelar a la democracia y comienza paulatinamente a promover transformaciones de toda índole y de distintos alcances. Factores como el avance permanente de la innovación científica, la expansión de la era del conocimiento, el acceso más amplio a las nuevas tecnologías, la continuidad democrática en la región, la capacidad de articulación de la diversidad y la comprensión de los efectos negativos de las agendas globales y regionales, sumados al aprendizaje generado por logros alcanzados en estrategias de impacto que combinan tecnología, uso del espacio público, incidencia institucional, creatividad y presencia en medios de comunicación innovadores, imponen algunos límites a los abusos de poder público o privado y generan una prematura pero concreta incidencia en políticas públicas que garantiza mayor inclusión social. La movilización social deja así al descubierto en múltiples casos las limitaciones de la democracia, de la institucionalidad y los alcances del estado nación. La comprobación de que las acciones individuales y colectivas de la sociedad, más allá de la acción del Estado, generan cambios sociales puntuales que, de articularse, pueden convertirse en cambios sistémicos o transformaciones de escala para solucionar problemas públicos específicos, renueva el modelo democrático tradicional al combinar la lógica de representación política en las instituciones con la lógica de legitimidad social en la participación. En particular, la organización de esquemas de cooperación horizontal con múltiples actores conduce a un empoderamiento ciudadano más extendido y transparente. A lo largo de 15 años se generan beneficios concretos a partir de las nuevas formas de participación que trascienden la órbita de las instituciones y las convocatorias organizadas por los espacios tradicionales y, al mismo tiempo, se visibilizan los riesgos de cooptación por los poderes fácticos y reales y que la misma tecnología termine limitando su impacto. Es el escenario de la movilización, la presión y la creatividad popular frente al poder tradicional.

Desde **2015** se multiplican las voces en la región que denuncian los límites que se derivan de la noción tradicional de la institucionalidad democrática. Advierten que cualquier iniciativa de reforma en rubros como los de educación, salud, medio ambiente, gestión pública o innovación urbana, entre otros, tiene enormes posibilidades de naufragar en el debate público, manipulado por los intereses particulares y los poderes fácticos, o de que se diluya su sostenibilidad en el tiempo ante la abundancia de deliberaciones y controles que restan efectividad a las políticas

LÍNEA DE TIEMPO



públicas. Las mayores expectativas de una creciente clase media en la región con mayor poder adquisitivo y mayor cultura cívica se traducen en una creciente impaciencia ante la lentitud con la que se acogen las propuestas de cambio y se brinda efectiva respuesta a las necesidades ciudadanas. Muchos, además, señalan la imposibilidad de identificarse con los políticos y los partidos tradicionales, ni siquiera allí donde los gobiernos recientemente elegidos tienen aún un prestigio mayoritario.

Lo anterior conduce a un cuestionamiento permanente y cada vez más evidente desde la sociedad civil latinoamericana de la legitimidad y la relevancia del marco institucional actual, sobre todo a la luz de la creciente heterogeneidad de una población que ya no se siente representada por sus propias instituciones. Al mismo tiempo, se cuentan por miles los ciudadanos que se resisten a quedarse cruzados de brazos, sin un rol activo en las cuestiones que más los afectan. La democracia tradicional, en una opinión cada vez más extendida, es incapaz de resolver los problemas estructurales del siglo XXI, como el cambio climático y el aumento de la desigualdad. Como para muchos la democracia no funciona bien y no se emprenden los esfuerzos necesarios para reformarla, la propia ciudadanía es la que debe tomar conciencia de su efectiva capacidad para la transformación social.

Las semillas de la insatisfacción y el compromiso público empiezan así a germinar con mayor fuerza. Desde **2016** cobra mayor ímpetu el proceso que se denomina como la Primavera Latinoamericana. Sus antecedentes inmediatos son las manifestaciones masivas en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y México, en algunos casos para salvaguardar los derechos civiles y políticos, en otros para exigir avances en los derechos económicos, sociales y culturales y en otros más para exigir condiciones mínimas de seguridad, de justicia y de fin a la impunidad. Sin embargo, lo que estalla desde **2016** es de mayores proporciones. Millones de ciudadanos, especialmente jóvenes, salen a las calles de la mayoría de ciudades latinoamericanas convocados en redes sociales con la intención de estremecer los fundamentos del modelo económico y político de cada país. Aflora la insatisfacción generalizada por la falta de legitimidad de las instituciones políticas y judiciales y por las deficiencias y malos manejos en materia de gestión pública. En algunos eventos prima la protesta cívica y en otros las conductas violentas de grupos radicales. Con todo, el impacto de las manifestaciones lleva a que

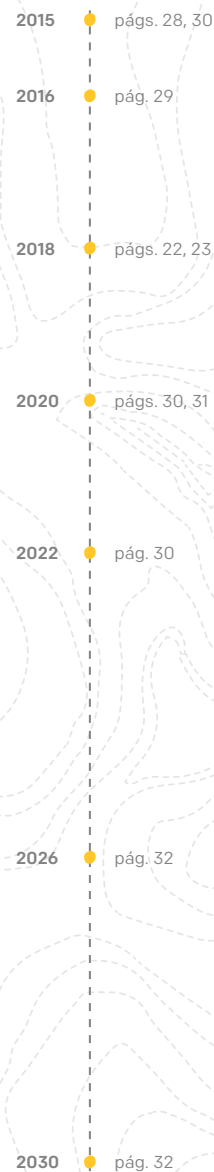
el concepto tradicional de calentamiento global se extienda ahora en América Latina a la idea de calentamiento social. En muchos casos, las calles se llenan de proclamas en contra de los relatos y discursos demagógicos, de la cultura de la confrontación y del círculo vicioso del clientelismo, la corrupción y la impunidad. Son los jóvenes, principalmente, los que se empoderan del malestar a partir de la ausencia de respuestas a sus propias expectativas de desarrollo.

La tensión política a nivel doméstico y regional es inocultable, pero aun así los resultados son insatisfactorios porque las reformas inspiradas en las marchas son insuficientes y no hay un verdadero remezón de las instituciones de poder vigentes. No obstante, la Primavera Latinoamericana es el motor de inicio de una década en la que predomina un mayor empoderamiento ciudadano. El emblema predominante es el de la necesidad de establecer mecanismos para “organizar a los desorganizados” y contrarrestar con mayor vigor la influencia negativa de los Estados cooptados por intereses minoritarios y penetrados por la corrupción o el crimen organizado. Ante la ausencia de un nuevo contrato social implícito que restablezca las relaciones entre ciudadanos e instituciones, se multiplican las organizaciones de la sociedad civil y los individuos cuya actividad pública se circunscribe fuera de los márgenes de la política oficial.

Bajo la convicción aprendida de que las protestas callejeras son un medio que causa mucho estruendo mediático pero que tiene efectos efímeros, múltiples grupos de la sociedad civil se integran y organizan en torno a experimentos recientes o recurrentes de índole agraria, política, empresarial, cultural, vecinal o religiosa que en unos casos buscan interpelar y cuestionar la acción del Estado y en otros pretenden reemplazarla o complementarla a través de soluciones, principalmente a escala local, que trascienden en muchas ocasiones las posibilidades institucionales. Muchos sectores en la región se vuelven indiferentes al debate político, a las contiendas electorales y a las personas que llegan al poder. En efecto, cuentan con cauces de participación y medios de influencia mucho más directos, inmediatos y efectivos que el voto y su acción se produce independientemente de la ideología, color político o desempeño administrativo de los gobernantes de turno.

Con el respaldo de nuevas tecnologías de comunicación y de intercambio de conocimientos, que no se limitan solo al Internet, así como

LÍNEA DE TIEMPO



de nodos sociales con una actitud más pragmática y menos ideologizada, surgen nuevos agentes de cambio encarnados en coaliciones cívicas cohesionadas en torno al cumplimiento de sueños comunes y metas específicas que se suman a los ya poderosos movimientos de base existentes para **2015**. Se trata de innovaciones que provienen de la sociedad, no del Estado. Hacia **2022**, en inmediaciones de un nuevo ciclo electoral, se revela que aproximadamente uno entre tres latinoamericanos forma parte de una de esas coaliciones o colabora activa o pasivamente con su trabajo, siguiendo así una tendencia mundial de activismo que crece a lo largo del planeta y que plantea serios desafíos al poder tradicional. Las encuestas revelan que la inconformidad latinoamericana no es con el sistema democrático en sí mismo sino, más bien, con los partidos que lo representan y con el ejercicio de la política que lo tergiversa y disuelve, engañando usualmente a los ciudadanos menos favorecidos y suscribiendo acuerdos oscuros entre los gobernantes de turno y muchos poderes fácticos.

Para muchos, las instituciones nunca podrán estar a la altura de las expectativas más sofisticadas de la sociedad civil. Solo en algunos casos de países latinoamericanos se registra un remezón institucional causado por la presión popular, pero los que más abundan son casos de reformas específicas generadas por la movilización popular que en algo contribuyen a incrementar la satisfacción de los ciudadanos. Sin embargo, persiste el hastío por la ineficiencia y la corrupción. Ante la imposibilidad de un cambio sistémico en varios países de la región, son los propios ciudadanos los que se echan al hombro algunas causas específicas, sin depender necesariamente de los políticos elegidos en los comicios o de los expertos que influyen en la agenda pública.

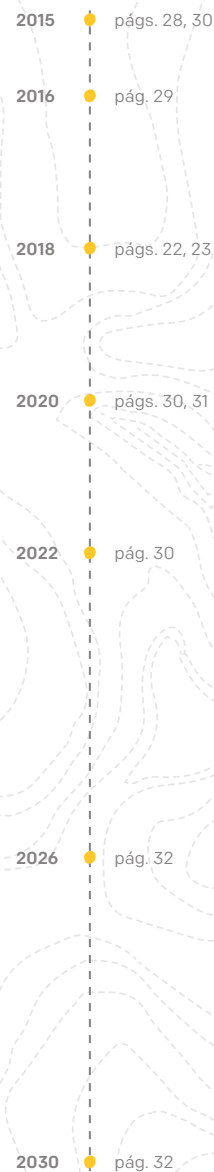
La movilización ciudadana a partir de sus diversas redes de trabajo demuestra ser un potente medio para transformar la indignación en acción, convocar a más personas y aportar mayor dinamismo e innovación en la resolución de problemas sociales. En la década de **2020**, en varios países de la región subsisten modelos replicables de experimentación democrática, sobre todo a nivel local y regional y ocasionalmente a nivel nacional, en asuntos como la seguridad alimentaria, el desarrollo económico local con nuevas formas de comercialización basadas en modelos de economía sustentable y justa, las nuevas conquistas de derechos de los pueblos indígenas y la democratización de los medios de comunicación. Emergen también

nuevos modelos de educación y nuevas formas de producción y diseminación del conocimiento, lo que provoca una transformación en las universidades y en muchos de los tradicionales centros de monopolio del saber. El ideal democrático regional es ahora más flexible y con un tinte mucho más local, y muchas más personas aportan su conocimiento y experiencia en causas específicas de progreso social. Se reproducen así los casos en los que la sociedad civil se organiza para impulsar proyectos productivos, o para ofrecer mejores condiciones de educación y salud a poblaciones vulnerables, o para renovar el entorno urbano, entre otros ejemplos en los que el Estado suele brillar por su ausencia, fragilidad u obsolescencia.

En otros casos, la organización de la sociedad civil permite ejercer el derecho de protesta en forma más inteligente y contundente y librar batallas de inclusión social y oposición al poder tradicional. Se reclama que la relación con las instituciones públicas pase de ser unidireccional a ser bidireccional, porque los ciudadanos cuentan ahora con medios de participación más inmediatos que el voto. A nivel local, por ejemplo, cobra mayor fuerza el modelo de presupuestos participativos y se imponen nuevas formas de veeduría, en las que se ejerce mayor presión para que los gobernantes asuman de lleno la responsabilidad política por el suministro y la calidad de los bienes públicos que la comunidad necesita y demanda. De este modo, los activistas acuden a todos los medios posibles dentro y fuera de Internet, a todos los medios convencionales y alternativos a su alcance, para generar una mayor presión pública y mediática a los poderes fácticos en el sector público y en las empresas y garantizar, en consecuencia, el predominio del interés colectivo sobre el particular.

La región se convierte así en un interesante laboratorio a nivel mundial de movilización pública y se multiplican los ejemplos que demuestran que la gestión pública en algunos casos sí puede ser moldeable según las expectativas ciudadanas. Tanto el Estado como las empresas son interpelados cada vez más. Se declaran algunas batallas en contra de las restricciones a la libertad de expresión, canalizando información independiente y poniendo un altavoz de difusión internacional en boca de voces opositoras. Otras se libran en contra de la corrupción, generando mejores mecanismos de fiscalización y escrutinio público. En países con una deriva autoritaria más marcada, la presión popular acude a todos los mecanismos a su alcance para

LÍNEA DE TIEMPO



denunciar y neutralizar los abusos del poder. Incluso en los regímenes con mayores cualidades democráticas, la presión popular consolida en muchos casos su capacidad de impedir la materialización de acciones de gobierno con las que no se está de acuerdo, o de limitar o vetar la influencia de organizaciones como, por ejemplo, las de lobby empresarial cuando actúan en beneficio exclusivo de unos pocos. Las alianzas con múltiples actores son ahora más comunes y a las corporaciones no les queda más remedio que incluir en su agenda las prioridades sociales, sobre todo en materia ambiental. Para muchos, en la América Latina de la segunda década del siglo XXI se vive la democracia en la piel, con una apropiación colectiva de intereses comunes más allá del tradicional esquema representativo y con un seguimiento y control de la gestión de gobiernos y empresas.

La lección primordial que desde entonces reciben los políticos y empresarios es para muchos muy clara: la voz de los ciudadanos importa cada vez más. Los ciudadanos se organizan progresivamente para exigir no solo más desarrollo económico sino sobre todo mayor desarrollo humano. Es ese reciente barómetro del bienestar el que poco a poco determina el éxito o fracaso en la gestión pública latinoamericana. En algunos casos, los gobernantes toman nota del fenómeno. De este modo, la descentralización paulatina del poder, la responsabilidad colectiva en asuntos públicos, la inclusión y el pluralismo son fuentes de inspiración cada vez más reales y sin las que resulta imposible la cabal comprensión de la sociedad latinoamericana en el siglo XXI.

No obstante, no transcurre mucho tiempo para que la movilización pública empiece a mostrar sus propias limitaciones en varios países de la región. Muchos reconocen que los procesos de activismo social sufren de altibajos frecuentes. Los líderes sociales en muchas ocasiones caen bajo la mira de grupos paramilitares o de las propias fuerzas militares de algunos países con una mayor propensión a la represión de la sociedad civil. En unos casos, surgen líderes influyentes que encarnan las reivindicaciones de grupos sociales, al estilo de lo que ha ocurrido en años anteriores en ciertos países europeos. Algunos de ellos forman partidos políticos y participan en elecciones, en varios casos apelando a premisas de tinte populista, pero al llegar al poder adoptan los mismos hábitos y conductas de los políticos tradicionales o se enfrentan a los mismos obstáculos de sus antecesores, lo que genera nuevas frustraciones y cuestionamientos desde algunos sec-

tores por haber sucumbido a la tentación de la “institucionalización”.

Sobre todo, se evidencian cada vez más los límites de trabajar con una estrategia que en muchos países de la región se traza en confrontación directa con el Estado. Los miembros de las redes se percatan de que con los frutos de sus esfuerzos han ganado batallas significativas pero quedan muchos rezagos por remediar. Un balance estadístico a mediados de la década de **2020** demuestra, además, que el activismo social ha sido más efectivo a la hora de asediar, postergar y diluir las acciones estatales que al momento de asumir un compromiso de largo aliento con los problemas más graves de la región. En varios casos, se concluye que la capacidad de acorralar la acción política va en detrimento del propio interés ciudadano. Muchos aprenden que es más fácil ser un medio de oposición que una plataforma con programas definidos, especialmente cuando se tiene en cuenta que buena parte de los ciudadanos proactivos se movilizan más por cuestiones muy delimitadas que los afectan en forma directa y particular, que por una visión general de sociedad y de futuro.

Desde comienzos de **2020** aproximadamente, los latinoamericanos son testigos de cómo ciertas organizaciones de activismo inspiran a algunos grupos con expectativas y valores no siempre democráticos. Son a veces el combustible de partidos extremistas y de ideas populistas, xenófobas o propias del fundamentalismo religioso, entre otros paradigmas cuyo apogeo relativo lamentan los activistas de buenas intenciones. En el debate público aumenta la agresividad y polarización, porque muchas redes de activistas se convierten ante todo en una catarsis para los sentimientos de ira y frustración y para la simplificación de cuestiones públicas, cuyo análisis requiere de un mayor grado de complejidad y de matices. Se reproducen con inusitada frecuencia las ideas nocivas, los mensajes de los falsos expertos y los delirios de líderes populistas, que prometen soluciones irrealizables y atizan el odio a la menor oportunidad. Para muchos, el resultado de lo anterior es, ante todo, el de la trivialización de la política, lo que conlleva que al final no haya un impacto tangible en la renovación democrática o en las mejores condiciones institucionales en muchos países de la región.

De hecho, muchos analistas de estos nuevos fenómenos que cobran cada vez más fuerza en la década de **2020** advierten que las fuerzas sociales, cuando actúan en abierta oposición al Estado, contribuyen en

LÍNEA DE TIEMPO

2015 • págs. 28, 30

2016 • pág. 29

2018 • págs. 22, 23

2020 • págs. 30, 31

2022 • pág. 30

2026 • pág. 32

2030 • pág. 32

muchos casos a fragmentar el poder, lo que impide llegar a consensos mínimos que son, para una gran mayoría, la única vía posible para reformar las instituciones y garantizar índices crecientes de bienestar y progreso. Se genera así un círculo vicioso de desconfianza mutua e interferencia en la gestión, o incluso de parálisis, que afecta en muchos casos a los habitantes más pobres de la región. Una mala concepción del activismo demuestra en algunos ejemplos en países de la región ser un aliado de la disfuncionalidad administrativa y del estancamiento en el proceso de resolución de los problemas más graves.

A pesar de lo anterior, el empoderamiento ciudadano en América Latina sigue su marcha, y su rol sigue siendo crucial a la hora de preservar el funcionamiento democrático. Al llegar al ciclo electoral de **2026**, varios líderes y voceros reconocidos en la región sostienen que, a pesar de la relevancia de la labor cumplida hasta el momento, las innovaciones participativas no pueden por sí solas ofrecer soluciones permanentes a problemas estructurales y que, por ende, jamás podrán reemplazar al Estado. A la vez, señalan que lo que sí pueden conseguir es una redistribución del poder y una alternativa de presión con la capacidad de reforzar la acción de las instituciones públicas, de desplegar reformas estructurales de los partidos políticos y de afianzar el ejercicio democrático de los países en la región, aun con los naturales riesgos de cooptación por parte del Estado. Concluyen, por ello, que la presión social es cada vez más influyente para quienes insisten en cerrar las puertas del poder político a la gran masa de ciudadanos de la región. En los últimos estertores de la década se emprenden por fin, y con grados variables de éxito, algunas reformas a lo largo del continente para ampliar formalmente la participación ciudadana, distanciar los vínculos entre el poder político y el poder económico y reforzar los gobiernos locales desde una perspectiva en la que priman la visión y el interés ciudadanos.

Es a nivel local, precisamente, en donde más ejemplos se encuentran de trabajo conjunto para cerrar distancias entre ciudadanos y Estado, lo que algunos denominan como “Estado-red”. Casos como los de artistas que rediseñan fachadas y barrios en deterioro con el respaldo del gobierno local, o de activistas que logran erradicar la crueldad animal a través de alianzas y de manifestaciones con eco en la opinión pública, o los jóvenes que organizan eventos culturales en contra de la violencia o el machismo con el respaldo estatal, o los de periodistas que fundan

nuevos medios comunitarios con financiación estatal parcial pero con estrictas condiciones de independencia, o poblaciones locales que trabajan en interacción público privada para la inclusión plena de los grupos menos favorecidos, o alianzas estratégicas entre Estado y sociedad para garantizar un marco jurídico estable con foco en la sostenibilidad productiva, ética, ambiental y social y con exigencias específicas de seguridad alimentaria, energética y ambiental, son referentes latinoamericanos de innovación cívica y dinamismo que se estudian y emulan en otras ciudades del mundo. También se acumulan experiencias fallidas y eventos de ruptura entre Estado y sociedad que operan igualmente como referentes de la complejidad que se deriva de pasar de las buenas intenciones a resultados sostenibles.

Por eso, el potencial de la presión popular a partir de **2030** se explica especialmente en la creación de alianzas y círculos virtuosos para el desarrollo de una cultura de participación ciudadana estable que acorte las brechas entre una sociedad civil dinámica y sofisticada, una versión 3.0, y un Estado sumido en el letargo de una versión 1.0. Muchos analistas de estos fenómenos concluyen en **2030** que la mutua colaboración y el permanente intercambio de ideas es el único camino para lograr una democracia verdaderamente inclusiva y no una sociedad meramente declamativa. Al filo de una nueva década, los latinoamericanos entienden que la condición para asumir y ejercer el poder necesario para superar los males endémicos de la región es la confianza recíproca, entre ellos mismos y con sus representantes en el Estado, especialmente en momentos en los que las amenazas de la desigualdad, las crisis económicas y el deterioro ambiental están más vivas que nunca.



La democracia en

AGONÍA



LA DEMOCRACIA EN AGONÍA

LA DEMOCRACIA EN AGONÍA

En este escenario, la democracia se ve apropiada en buena parte de América Latina por la influencia depredadora del comercio ilícito que prevalece sobre la acción del gobierno o convive con ella. Los ciudadanos oscilan entre el cinismo y en unos casos la desesperanza, allí donde el territorio es gobernado de facto por el crimen organizado que impone fuerza y muestra cierto hálito de prosperidad temporal, y en otros casos el terror, allí donde el territorio se encuentra en disputa. El sistema de toma de decisiones políticas se vuelve funcional a una serie de intereses opacos que disfrazan sus verdaderas intenciones detrás de imaginarios y demandas ciudadanas legítimas. La corrupción se consolida como el modus vivendi de políticos, empresarios y criminales por igual, que viven y prosperan a la sombra del Estado. Las actividades ilícitas reconfiguran no solo el monopolio del poder estatal sino también la actividad empresarial legítima y las pautas de convivencia en ciudades y barrios. Tres lustros de violencia consolidan territorios fuera del control de los Estados nacionales y, aún más grave, algunos Estados fallidos que la comunidad regional e internacional solo trata de contener. El destino común de las democracias de la región está en vilo. Es el escenario de la violencia, el miedo, la sensación de derrota y el secuestro de la democracia.

Desde **2015** se registra un alejamiento aún mayor entre los partidos políticos y los ciudadanos. Las finalidades ideológicas y programáticas de los primeros se convierten cada vez más en instrumentos funcionales de la corrupción y el crimen. Son ahora maquinarias electorales, oportunistas y clientelistas financiadas por el crimen organizado y los poderes fácticos de empresarios que deben sus fortunas a la permanente connivencia con las debilidades del Estado. Como los partidos van logrando mayores ingresos y mayor capacidad de convocatoria, sofocan con frecuencia las iniciativas de ciudadanos bien intencionados pero sin los medios suficientes para que su mensaje cale en la población. Los paradigmas añejos de la política tradicional se afianzan como la regla común, y se popularizan así premisas como “un político pobre es un pobre político”. Una vez llegan al poder, los representantes deben rendir cuentas y ser funcionales a los intereses privados de quienes los financiaron y encumbraron.

LÍNEA DE TIEMPO

2015 • págs. 34, 35, 36

2016 • pág. 35

2020 • págs. 35, 37

2025 • págs. 36, 37, 38

2030 • pág. 35, 36, 37, 38

En todo caso, desde **2015** se hace evidente en varios casos que el creciente vacío estatal no significa la desaparición de la burocracia: lo que va quedando es una estructura administrativa rudimentaria, con estrechos márgenes de acción política, con muy limitada capacidad de ejecución y sin mecanismos ni incentivos para su profunda renovación. Mientras tanto, los grupos especialmente vulnerables siguen a la deriva, sin una atención enfocada del Estado para prevenir su inserción en el mundo de la ilegalidad. Y, sobre todo, no existe en muchos países de la región la suficiente voluntad política para aprender de los errores del pasado, trazar una visión colectiva que depure la administración pública y afrontar la lucha contra el crimen con una combinación de pragmatismo, responsabilidades comunes, transparencia y prevalencia de los derechos y garantías fundamentales propias de un Estado democrático.

La desunión y la ausencia de visión y de voluntad política se hacen visibles, por ejemplo, en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada al tema de drogas de **2016** (UNGASS, por sus siglas en inglés), ocasión que muchos consideran propicia para llegar con una posición en bloque que permita impulsar eficazmente ciertas reformas a las políticas de drogas que tanto impacto tienen en la estabilidad de la región. Sin embargo, desde los gobiernos latinoamericanos prima en algunos casos la pasividad, en otros la conveniencia, en otros más el fundamentalismo moral y en todos la ausencia de audacia. En muchos de ellos cunde la aprensión a impulsar opciones diferentes por temor a sanciones económicas internacionales o, sencillamente, ceden a la consuetudinaria oposición de la opinión pública latinoamericana a las reformas de las políticas de drogas y a la regulación de la marihuana. Ello impide llegar a la cita con consensos mínimos regionales en materia de enfoques alternativos para enfrentar un problema que por definición es transfronterizo y que por ello requiere soluciones que trasciendan la figura de los estados nación. Poco se logra al final de la sesión, a pesar de que en otras latitudes sí se suscriben consensos mayoritarios al respecto, refrendados democráticamente, particularmente en lo que concierne a las políticas de reducción del daño y a la necesidad de asumir el consumo como un problema de salud y no penal.

El paradigma legal e institucional de lucha contra las drogas que se dirige al combate militar contra la oferta y que impera desde hace

varios años en la región sigue así vigente, con muy contadas excepciones, lo que explica, según muchos estudios, el recrudecimiento de la violencia y la expansión de los vínculos entre los narcotraficantes y el devenir político, económico y social de un grupo creciente de países en la región. De hecho, muchos analistas coinciden en que al finalizar la segunda década del siglo XXI no hay un solo país en América Latina ajeno al radio de acción del tráfico global de drogas. Mientras tanto, el consumo de drogas ilícitas en el mundo sigue constante.

El dilema no se limita solo al narcotráfico. Como sucede con tanta frecuencia en la historia, las amenazas no terminan sino que se transforman, ahora con el respaldo de nuevas tecnologías. Las fortalecidas redes de traficantes perciben que la debilidad relativa o ausencia absoluta de las instituciones democráticas y el poder corruptor del dinero ofrecen incentivos para ir más allá del rentable mercado de estupefacientes. En el mundo hay toda una serie de actividades delictivas cuyas utilidades son tan grandes que hacen que la acción del gobierno sucumba siempre ante la lógica de los mercados ilegales. La década de **2020** en Latinoamérica se caracteriza así, entre otros factores, por la expansión del comercio ilícito de armas de toda clase, de objetos falsificados, productos piratas e ideas robadas, de metales preciosos, de órganos humanos y de personas indocumentadas y/o esclavizadas. A tono con las nuevas tendencias mundiales, la ciberdelincuencia, relacionada con crímenes digitales como el hurto, la extorsión y el espionaje se arraiga más en la región. Se redoblan los ciberataques a entidades públicas y a empresas y se divulga una nueva especie de delincuente con poder de desestabilización: el “cibercapo”, que opera en la cúspide de un cartel digital con creciente fuerza en la clandestinidad. Los recursos naturales son objeto de una explotación descontrolada, con el correspondiente perjuicio en el abastecimiento del agua. La poderosa lógica amoral del mercado ilícito se extiende con la velocidad del fuego, sin que los gobiernos sepan cómo extinguir el incendio. En algunos casos, incluso, no hay un interés real de extinguirlo gracias a la presión e influencia política de los traficantes.

El número de homicidios y desapariciones atribuibles al tráfico ilícito entre **2020** y **2030** alcanza cifras epidémicas sin precedentes incluso en el perturbador contexto latinoamericano de comienzos de siglo. Los fenómenos de violencia criminal que eran comunes en partes de México, Colombia y los países del Triángulo del

LÍNEA DE TIEMPO

2015 • págs. 34, 35, 36

2016 • pág. 35

2020 • págs. 35, 37

2025 • págs. 36, 37, 38

2030 • pág. 35, 36, 37, 38

Norte se extienden y son ahora pan de cada día en un alarmante porcentaje territorial de la región, aun a pesar de su complejidad demográfica y geográfica. La región se posiciona de nuevo y reiteradamente como la región más violenta y mortífera del mundo.

El crimen organizado es un poder de facto en un número cada vez mayor de localidades y territorios, en donde los servicios públicos brillan por su ausencia. Millones de latinoamericanos deben doblegarse ante las condiciones de los criminales, que imponen sus propias reglas en materia de justicia, fiscalidad y seguridad. O se doblegan o intentan irse. Los impuestos legales se reemplazan por extorsiones. Los mecanismos de solución de conflictos y controversias se basan ahora más en la fuerza que en el derecho. Se construyen nuevas infraestructuras deportivas financiadas con dinero ilícito. En suma, el crimen organizado suple a su propio arbitrio las carencias de la ausencia de Estado. Los criminales buscan legitimar su presencia en la sociedad y en muchos casos lo logran. En numerosos ejemplos se expresa descarnadamente el problema de la criminalidad pero también hay otros en los que las actividades normales funcionan debidamente, aun sin el amparo estatal, como el turismo, el comercio y los carnavales. Se produce así la paradoja del crimen organizado como generador de paz y estabilidad, que incluso provee bienes públicos y evita espirales significativas de violencia.

Con todo, desde **2025** se multiplica exponencialmente el número de análisis y notas de prensa que se refieren a América Latina como la región en la que, como nunca antes en la historia, se han socavado formas de gobierno construidas sobre ideales democráticos. Los casos de secuestro de la democracia pasan poco a poco de ser anomalías aisladas, a ser la regla general en un porcentaje alarmante de territorios y, en casos concretos, de países.

Los jóvenes de zonas marginadas siguen siendo en la segunda década del siglo XXI las principales víctimas y los principales verdugos. Las pandillas urbanas continúan siendo mano de obra barata para los traficantes y crecen gracias a la falta de oportunidades, al abandono escolar y a la necesidad de reconocimiento y pertenencia de muchos jóvenes que no encuentran refugio en otros lados. Ante dichos jóvenes prevalecen sobre todo los ejemplos de la codicia y el dinero fácil, y es entre ellos en donde más se dispara el tráfico y consumo de drogas. Se

multiplica la violencia de género y, bajo el arquetipo patriarcal común de fenómenos como el pandillismo, se cierran las oportunidades de progreso y de participación ciudadana a las mujeres, sobre todo a las que viven en zonas rurales. Tales prejuicios se extienden a la población LGTBI, que sufre una represión habitual en este magma social de tanta violencia. Muchos campesinos y pueblos indígenas son desplazados de sus poblaciones y despojados a la fuerza de sus posesiones. Como resultado de todo lo anterior se exacerban en algunos casos los índices de desempleo, pobreza, desigualdad y desequilibrio ambiental.

Con todo, el potencial productivo de la región entre **2015** y **2030** se reduce en un porcentaje equivalente a muchos miles de millones de dólares anuales. Los empresarios legítimos deben competir ahora en condiciones de desventaja y de riesgo personal y familiar con las actividades “blanqueadas” de los traficantes que sirven para el lavado de capitales. Sus empresas sucumben por estar ubicadas en entornos poco atractivos a la inversión, lo que disminuye paulatinamente la oferta de empleo formal. Son las actividades informales las que crecen en forma exponencial. Otros empresarios con menos escrúpulos se prestan ellos mismos al lavado de dinero a través de actividades comerciales legítimas como la construcción, las farmacias y los servicios financieros, entre otras. Entre tanto, la legitimidad del poder judicial se ha debilitado al máximo debido a la coerción, la corrupción, la cooptación y la falta de recursos. El poder judicial deja así de ser uno de los contrapesos de la democracia. El ejército y la policía tampoco son ajenos a las actividades criminales. Muchos uniformados reciben un pago muy superior al de su salario para ignorar las transgresiones a la ley o proteger a los criminales. En algunos casos, durante las horas de servicio sirven a los intereses del crimen organizado bajo la impunidad que les confiere el uniforme, y cuando se lo quitan pasar a ser miembros clandestinos de cuadros medios o inferiores de los ejércitos criminales.

En la sociedad civil se instala con mucha frecuencia el silencio, el temor, la apatía y, a veces, la doble moral. Varios optan por el camino de la migración, especialmente hacia Estados Unidos pero también hacia otros países del continente. Se trata tanto de padres como de menores solos e indocumentados. Tal repunte de la migración rompe la cohesión social básica de vínculos paternos, familiares y afectivos que tratan de ser suplidos sin éxito con remesas y viajes periódicos. Las remesas generan ingresos que permiten sostenerse

LÍNEA DE TIEMPO

2015 • págs. 34, 35, 36

2016 • pág. 35

2020 • págs. 35, 37

2025 • págs. 36, 37, 38

2030 • pág. 35, 36, 37, 38

a algunas familias, pero a la vez tienen efectos colaterales perversos al no propiciar mayoritariamente actividades productivas sino solo el consumo dentro del territorio en que se reciben. También se cuentan por miles los que se refugian en la fe y se asilan en iglesias y cultos religiosos, cuyo funcionamiento y actividades en algunos casos son financiados por los propios traficantes. Los que pueden, la minoría, incrementan el gasto en seguridad privada y en el completo aislamiento del resto de la población por medio de conjuntos residenciales privados que se vuelven la nueva moda entre las élites de la región.

Alrededor de **2025**, y ante la ausencia de una concepción transnacional que permita unir fuerzas en torno a la amenaza del crimen, las reacciones a la crisis generalizada son de distinto calibre según cada país. En algunos casos crece el número de ciudadanos hastiados que exigen mano dura, aun si ello implica la renuncia a los preceptos constitucionales y a las políticas de prevención del delito. En esos casos llegan al gobierno personas que, siguiendo una tradición que se creía superada en la región, ejercen el poder en forma arbitraria, prometiendo soluciones populistas de corto alcance, y al mismo tiempo, vulnerando constantemente los derechos democráticos. En otros países, la ausencia de respuestas contundentes por fuera del marco constitucional y legal hace que cada vez más ciudadanos comunes se armen hasta los dientes y se organicen en patrullas o grupos de autodefensa para ejercer la justicia por propia mano, o protagonicen fenómenos de linchamientos, o justifiquen la adopción de cualquier medida de tipo represivo y totalitario por parte de autoridades locales.

En casos concretos se apunta no solo a atacar las consecuencias de la seguridad dentro del marco institucional sino sobre todo las causas, que se relacionan casi siempre con problemas ancestrales de exclusión social. Se desarrollan campañas educativas para crear mayor resiliencia en las comunidades ante la tentación del delito, así como treguas con los grupos de delincuentes o pandillas, que algunos denuncian como una claudicación ante el crimen. Además, se emprenden ingentes esfuerzos para mejorar la infraestructura en los barrios más vulnerables y la calidad de los servicios públicos a cargo del Estado. También se introducen actividades culturales y deportivas en espacios públicos recuperados a los criminales. Sin embargo, el margen de maniobra de dichos gobiernos para enfocarse en las necesidades sociales es muy limitado y las

arcas públicas se han disminuido al máximo. Se hace visible una relación perversa: entre mayores son las necesidades sociales debido a la inseguridad, menores son las condiciones económicas y financieras que permiten a los gobiernos afrontar el problema.

Por otra parte, a mediados de la década de **2020** se duplican los casos de ciudadanos que se organizan a través de campañas contra la amenaza criminal. La indiferencia y apatía general contrastan con el trabajo constante de líderes que se pertrechan en minúsculos círculos de resistencia personal y profesional y hacen frente al secuestro de la institucionalidad mediante su activismo y resistencia a vivir siempre bajo la sombra del crimen organizado. Lentamente permea la evidencia de que ni los gobiernos ni sus respectivos países pueden lograr resultados por sí mismos.

A pesar de lo anterior, muchos territorios de la mayoría de países de América Latina llegan así a **2030** sumidos en una crisis de inseguridad que parece no tocar fondo y que se antepone a cualquier otra consideración. Se trata de crisis territoriales que implican un riesgo notable para la desestabilización en el resto de la región. La debilidad de las instituciones, al mismo tiempo causa y consecuencia de la crisis, es en esos territorios más grande que nunca. La corrupción, el crimen organizado y la violencia impiden avances sostenibles en la construcción de un sistema que pueda salvaguardar las garantías democráticas más elementales. Lo que predomina en dichos territorios es la tradicional cooptación del poder. En otros casos impera la alternativa de la mano dura, y en otros sencillamente la anarquía. Se registra un adormecimiento o un adoctrinamiento de la conciencia colectiva. Parece faltar aún algún trecho para entender que la seguridad es un reto compartido, pues su resolución, según muchos, solo puede provenir de un compromiso tanto a nivel hemisférico como nacional. A nivel hemisférico, porque se requiere una acción coordinada ante una amenaza que no conoce fronteras como a nivel nacional. A nivel nacional, porque los estrechos vínculos entre exclusión social y violencia demandan una responsabilidad conjunta para atender prioridades y acordar estrategias sensatas a largo plazo en medio de los límites que imponen las restricciones presupuestales.

Los expertos más reputados en América Latina sugieren con insistencia que en la lucha efectiva contra el crimen debe confluir

LÍNEA DE
TIEMPO

2015 ● págs. 34, 35, 36

2016 ● pág. 35

2020 ● págs. 35, 37

2025 ● págs. 36, 37, 38

2030 ● pág. 35, 36,
37, 38

una mezcla integral de múltiples factores como la prevención, la coerción legítima, la tecnología de punta, la mayor coordinación institucional, el acercamiento a la comunidad, la inversión social, la reducción del daño, la cooperación internacional, la disminución de la rentabilidad de la actividad ilícita, la voluntad política y las reformas al aparato judicial, entre otros. Sin embargo, afirman, no hay atajos: es solo a través de la construcción de un sistema democrático incluyente y transparente que una al Estado, a la ciudadanía y a la comunidad internacional como se puede avanzar gradualmente en la superación del crimen y la violencia. Algunos casos específicos desde **2025** son pioneros en crear las condiciones propicias para esas circunstancias y por eso son la brújula bajo la que se sugiere coordinar la acción reformista de los demás, sin sucumbir ante la tentación totalitaria de los golpes de Estado y la mano dura. La luz de esperanza se asoma por fin al horizonte. Para muchos, la que por décadas ha sido la región más insegura del mundo, ha aprendido por fin la lección al despuntar **2030**, pero a un costo excesivamente alto.

Miembros

El componente medular de este ejercicio de planificación transformadora por escenarios –llamado Equipo de Escenarios– estuvo conformado por un grupo heterogéneo de 37 líderes y lideresas de la región latinoamericana provenientes de la academia, instituciones gubernamentales, parlamentarias y municipales, sociedad civil, organizaciones productivas, jóvenes, movimientos sociales, empresariado, comunicadores, pueblos indígenas, iglesia y fundaciones. Todos ellos son actores respetados en sus propios ámbitos y, como equipo, consolidan una amplia gama de conocimiento, experiencias y perspectivas que les permitió trabajar en forma conjunta y dialógica para construir una visión global del tema.

El proceso de construcción de escenarios incluyó la generación de un entendimiento más profundo sobre lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que podría suceder en las próximas décadas en las democracias latinoamericanas. Sin embargo, esto no implica que todos los miembros del Equipo de Escenarios estuviesen de acuerdo con la totalidad de los elementos de los cuatro caminos a futuro plasmados. En consecuencia, la lista de los miembros del Equipo de Escenarios que se presenta a continuación no representa un consenso sobre recomendaciones implícitas de estrategias, ensayos y reformas sino a las personas en sí mismas: un grupo diverso de líderes y lideresas comprometidos y conscientes, que trabajaron juntos con la esperanza de que estos escenarios puedan alentar una serie de diálogos en la región sobre el futuro de las instituciones democráticas en América Latina, contribuyendo a catalizar el cambio hacia una región más democrática, justa, próspera y segura en el siglo XXI.



El Equipo de Escenarios

PEDRO ABRAMOVAY

Director Regional para América Latina y el Caribe de la Open Society Foundations

NASCHLA ABURMAN

Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC)

LAURA ALBORNOZ POLLMANN

Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

IVANA BENTES

Profesora e investigadora en Comunicación Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro

NABIL BONDUKI

Secretario de la Cultura Municipal de São Paulo

LUIS JAVIER CASTRO LACHNER

Socio Director de Mesoamérica y Presidente e la Asociación Empresarial para el Desarrollo en Costa Rica

ÓSCAR CHACÓN

Director Ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC)

WÁLTER DELGADILLO TERCEROS

Ciudadano boliviano

NILCÉA FREIRE

Representante en Brasil de la Fundación Ford

ROSSANA FUENTES BERAIN

Fundadora de México Media Lab S21

MANUEL GARRIDO

Diputado de la Cámara de Diputados de la Nación en Argentina

MARÍA BEATRIZ (PILU) GIRAUDO

Presidenta de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid)

NEGA GIZZA

Conferencista y presentadora en Brasil, Central Unica das Favelas (CUFA)

GUSTAVO GORRITI

Director de IDL-Reporteros en Perú

CARLOS HERNÁNDEZ

Presidente de Junta Directiva de la Asociación para una Sociedad Más Justa en Honduras

MIGUEL LAGO

Socio Fundador Meu Rio en Brasil

JUAN PABLO LUNA

Profesor Asociado del Instituto de Ciencia Política, PUC-Chile

OTILIA LUX DE COTÍ

Directora Ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas desde Guatemala

CARLOS MARCH

Director de Comunicación Estratégica Fundación Avina

MARÍA CONSUELO MEJÍA PIÑEROS

Directora de Católicas por el Derecho a Decidir A.C. en México

ZULIA MENA

Alcaldesa del Municipio de Quibdó, Chocó en Colombia

CARLOS HUGO MOLINA

Rector de la Universidad Nacional Ecológica en Bolivia

RICARDO MOREL

Vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Compañía Minera Antamina en Perú

NOHRA PADILLA HERRERA

Presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia (ANR)

SUSEL PAREDES PIQUÉ

Abogada, activista y dirigente política en Perú

CLAUDIA PAZ Y PAZ

Ex Fiscal General del Ministerio Público de Guatemala

THAMY POGREBINSCHI

Investigadora Senior del WZB Berlin Social Science Center y Profesora de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro

MIGUEL PULIDO

Director Ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. en México

ANTONIA RODRÍGUEZ

Directora Ejecutiva de la Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo (ASARBOLSEM)

MARÍA PAULA ROMO

Política y Profesora Universitaria. Dirigente del Movimiento Ruptura en Ecuador

EUGENIO SCARPELLINI

Obispo de la Diócesis de El Alto en Bolivia

SCHUMA SCHUMAHER

Activista feminista, escritora y Coordinadora Ejecutiva de la Rede de Desenvolvimento Humano (Redeh) en Brasil

ALEXANDER SEGOVIA

Presidente del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (INCIDE) en El Salvador

JORGE SOTO

Director General Adjunto de Innovación Cívica, Coordinación de Estrategia Digital en México

LEÓN VALENCIA AGUDELO

Director Ejecutivo de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia

EDWIN VÁSQUEZ CAMPOS

Coordinador General Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)

JEAN WYLLYS

Diputado en la Cámara de Diputados de Brasil

Personas Entrevistadas

Además de los miembros del Equipo de Escenarios, las siguientes personas fueron también entrevistadas:

DAVID BOJANINI

Presidente del Grupo Sura en Colombia

MARTÍN ABREGÚ

Vicepresidente del Programa Democracia, Derechos y Justicia de la Fundación Ford

MARIO BRONFMAN

Representante para México y Centro América de la Fundación Ford

EPSY CAMPBELL

Diputada de la Asamblea Legislativa en Costa Rica

CELINA CARPI

Miembra de Junta Directiva de Libra Holding y Miembra del Consejo Deliberativo del Instituto Ethos en Brasil

FABIANA DEL POPOLO

Oficial de Asuntos de Población de la División de Población de la CEPAL en Chile

ANA HAZEL ESCHRICH

Secretaria General de SISCA en El Salvador

SERGIO FAUSTO

Director Ejecutivo de iFHC en Brasil

JOAQUÍN FERNANDOIS

Académico, historiador y columnista de El Mercurio en Chile

ELENA FORTES

Directora de Ambulante en México

GABRIELLA GÓMEZ-MONT

Fundadora y Directora del Laboratorio para la Ciudad de México

DANIEL GONZALES

Director del Programa Internacional de Migraciones de la Fundación Avina en Colombia

ODED GRAJEW

Coordinador de Rede Nossa São Paulo y Presidente Emérito del Instituto Ethos en Brasil

RAFAEL HERNÁNDEZ

Director de la Revista Temas y Profesor de la Universidad de La Habana en Cuba

JUANA KWITEL

Directora Programática de CONECTAS en Brasil

RONALDO LEMOS

Cofundador y Director Ejecutivo del Instituto Tecnología y Sociedad en Brasil

HENRIQUE LIAN

Director Ejecutivo del Instituto Ethos en Brasil

GUSTAVO LOPETEGUI

CEO de LAN en Argentina

MARÍA LÓPEZ

Directora de Sostenibilidad de Publicaciones Semana en Colombia

PÍA MANCINI

Cofundadora y Directora Ejecutiva de Democracia en Red y Cofundadora del Partido de la Red en Argentina

MYRIAM MÉNDEZ-MONTALVO

Representante para la Región Andina y el Cono Sur de la Fundación Ford

GERARDO MUNCK

Profesor de la University of Southern California

VALDECIR NASCIMENTO

Directora Ejecutiva de ODARA - Instituto de la Mujer Negra en Brasil

ADRIANA RAMOS

Directora Ejecutiva Adjunta del Instituto Socioambiental en Brasil

CÉSAR RODRÍGUEZ GARAVITO

Profesor de la Universidad de los Andes en Colombia

FRANCISCO ROJAS ARAVENA

Rector de la UPAZ en Costa Rica

MARIANO TURZI

Profesor de la NYU y Coordinador del Programa Asia-Pacífico UTD en Argentina

RICARDO YOUNG

Concejal de la Cámara Municipal de Sao Paulo, Brasil

Equipo de Reos Partners

MILLE BOJER

LUCILENE DANCIGUER

ELENA DÍEZ PINTO

TIÊ FRANCO BROTT

ANÁÍ LINARES MÉNDEZ

MARIANA MIRANDA

TOMAS ROSENFELD

Editor de los Escenarios

JUAN CARLOS MORRIS

Consejero al Proyecto

ANTONIO ARANÍBAR ARZE

Identidad Visual y Diseño gráfico

FABIO ISSAO

Alerta DEMOCRÁTICA

Escenarios para el futuro de la
democracia en América Latina
2015—2030

Realización



Apoyado por



Creative Commons – Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

El presente documento cuenta con licencia de Reos Partners Inc. bajo los términos expresados en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Esto significa que los usuarios pueden compartir y mezclar nuestro material siempre y cuando otorguen a Reos Partners Inc. el crédito debido. El presente documento no puede ser utilizado con fines comerciales. Véase <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>